Protegiendo el azul, comprendí el rojo de la bandera

— Narraciones desde la Armada —

Camilo Andrés Castiblanco Durán · Mateo Echeverry Ángel ·
Doris Yaneth Herrera Monsalve · Carol Malaver Sánchez

Protegiendo el azul, comprendí el rojo de la bandera

Narrativas desde la Armada

Protegiendo el azul, comprendí el rojo de la bandera

Narrativas desde la Armada

Camilo Andrés Castiblanco Durán
Mateo Echeverry Ángel
Doris Yaneth Herrera Monsalve
Carol Malaver Sánchez

Castiblanco Durán, Camilo Andrés

Protegiendo el azul, comprendí el rojo de la bandera: Narrativas desde la Armada/
Camilo Andrés Castiblanco Durán, Mateo Echeverry Ángel, Doris Yaneth Herrera Monsalve,
Carol Malaver Sánchez, Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2017.

194 páginas, ilustraciones, fotografías

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-958-782-023-2

1. Fuerzas armadas – Crónicas -- Colombia 2. Conflicto armado – Crónicas -- Colombia 4. Víctimas de guerra – Crónicas – Colombia I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 305.90695

CO-BoUST

© Camilo Andrés Castiblanco Durán, Mateo Echeverry Ángel, Doris Yaneth Herrera
Monsalve, Carol Malaver Sánchez
Auxiliares de investigación: Daniela Maldonado Palacios y Alejandro González
Greinsffenstein. Estudiantes Facultad de Sociología.

© Universidad Santo Tomás

© Armada Nacional de Colombia

Ediciones USTA Carrera 9 n.º 51-11
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (+571) 587 8797 ext. 2991
editorial@usantotomas.edu.co
<http://www.ediciones.usta.edu.co>

Directora editorial: Matilde Salazar Ospina
Coordinadora de libros: Karen Grisales Velosa
Asistente editorial: Andrés Felipe Andrade
Corrección de estilo: Henry Colmenares Melgarejo
Diseño y diagramación: Javier Barbosa
Fotografías páginas 24, 48, 66, 72, 109, 113, 134, 144,
154, 188, 189, 174, 190, 191: Javier Rozo.
Crédito fotográfico: Armada Nacional de Colombia

Hecho el depósito que establece la ley
ISBN: 978-958-782-023-2
e-ISBN: 978-958-782-024-9

Impreso en Colombia • Printed in Colombia
Impreso por: Digiprint Editores S.A.S.
Primera edición, 2017

Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la
autorización previa por escrito del titular de los derechos.

Tabla de contenido

Agradecimientos	9
Prólogo	11
Palabras de inicio	15
Presentación	17
Introducción	21
Contextos sociales: las dinámicas del conflicto armado	25
Introducción	27
El conflicto armado en la región Caribe. Los Montes de María	29
Contexto geográfico, social e histórico de la región del Pacífico Centro	53
Crónicas y relatos de vida	73
"A un héroe de la patria nunca lo recuerdan"	75
"Llore todo lo que quiera, pero esa pierna no le va a volver a nacer"	81
"Así como cargaba mi mochila, así cargaba la muerte a cuestas"	88
"La pérdida de un hijo nunca se supera"	94
"Levantaron fuego y... pa pa pa pa pa pa pa pa"	100
"Al ser humano nada le queda grande"	104
"Tuve que aprender a caminar de nuevo"	109
"Nos estamos cayendo"	114
"Mi padre fue un héroe que murió sin una sola medalla"	119
"Se trataba de perder una pierna, o mi vida"	123
Reseñas	130

Recordar/narrar:	145
Introducción	147
1. Recordar y narrar	149
2. Narrar desde lo militar	158
3. "Mi historia es..." (Notas sobre testimonios de miembros de la Armada Nacional y sus familias afectados por el conflicto armado)	164
4. El recordar y narrar, la memoria y la construcción de paz: a modo de conclusión	185
Referencias bibliográficas	193
Palabras finales	201

Agradecimientos

La realización de esta investigación y la publicación de este libro no podrían haberse realizado sin la colaboración y compromiso de las víctimas y del personal afectado de la Armada Nacional. Todos ellos, narraron momentos difíciles y traumáticos de sus vidas, con la esperanza de dar a conocer otra perspectiva del conflicto y de las afectaciones que éste generó. A todos ellos, eterno agradecimiento.

Así mismo, es necesario mencionar el apoyo constante de la División de Víctimas de la Armada Nacional de Colombia quienes fueron diligentes en apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo de este producto. Especial mención merece la Capitán de Corbeta Margarita María Miranda Guerrero, artífice de este proyecto, y gestora de la alianza entre la Universidad Santo Tomás y la Armada Nacional de Colombia.

Especial mención para Daniela Maldonado y Alejandro González, de la Facultad de Sociología, quienes demostraron las competencias investigativas de nuestros estudiantes, exhibiendo habilidades investigativas, de trabajo de campo, logísticas y administrativas. Este libro no habría podido realizarse sin su apoyo.

Finalmente, un agradecimiento a la Universidad Santo Tomás, y a todos los entes administrativos y académicos que intervinieron para apoyar cada una de las fases de este proyecto.

Prólogo

En la historia del conflicto armado interno de Colombia, la Armada Nacional debió desempeñar un papel que históricamente estaba destinado exclusivamente a los ejércitos de tierra. Desde la década del 50 en el siglo pasado, la Armada empezó a enfrentar el conflicto con las tripulaciones de las unidades fluviales destinadas a proteger los ríos fronterizos y con las tripulaciones de los botes del componente de la Infantería de Marina, que patrullaban por las arterias fluviales por donde el transporte acuático empezaba a padecer el flagelo de los grupos armados organizados.

Con la intensificación del conflicto en las últimas décadas del siglo xx, la Armada Nacional reorganizó su esfuerzo con el propósito de apoyar las operaciones que realizaban el Ejército Nacional y la Policía Nacional; esta última había sido desbordada por la intensidad del conflicto. En consecuencia, la Armada Nacional debió asumir una parte de la jurisdicción terrestre del país, específicamente la región de los Montes de María y la franja costera de 20 km del Pacífico colombiano. Así mismo, desplegó gran parte de su capacidad sobre la jurisdicción fluvial con el fin de apoyar la maniobra militar terrestre que lideraba el Ejército Nacional. Ante tal responsabilidad, la Armada Nacional se reorganizó internamente con el propósito de fortalecer al componente de Infantería de Marina y al componente de Guardacostas

en detrimento, si así se puede decir, de las responsabilidades propias de la Marina sobre la amplia jurisdicción marítima del país.

El papel institucional desempeñado en la región de los Montes de María, mediante operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, permitió que fuese la primera zona consolidada del país, convirtiéndola en un polo de desarrollo agrícola y una de las regiones pioneras en la superación efectiva del conflicto armado interno. El camino para alcanzar esto no fue nada fácil. La intensidad de la violencia y la degradación de las acciones armadas desarrolladas por los grupos armados organizados y por el narcotráfico contra los miembros de la Fuerza Pública, crearon las peores condiciones para operar en la región, cobrando la vida de muchos de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y afectando física y psicológicamente a otros más. Las acciones de los integrantes de la Armada Nacional, especialmente del componente de Infantería de Marina, evidencian el valor y el compromiso con el que los marinos de Colombia enfrentaron esta amenaza. A través de sus experiencias se cuenta la historia de todos los integrantes de la Armada. Muchos han debido hacer enormes sacrificios y se han llenado de valor, honor, lealtad institucional y transparencia en su actuar, para superar el reto de cumplir la misión y ganar el conflicto armado.

Las narraciones son desgarradoras, dolorosas y llenas de sufrimiento. Pero también son historias de resiliencia, de superación de las dificultades, de amor por el servicio al país y por la institución. Sus protagonistas nos enseñan que creyeron en la lucha por la consolidación de la seguridad y de la paz. Los relatos evidencian los sacrificios que los familiares de los miembros de la Armada debieron ofrendar, familias que con orgullo y admiración le recuerdan al país lo que sus seres amados hicieron para brindarle seguridad al resto de los colombianos.

Por todo lo anterior, la Armada Nacional ha querido generar un proceso de reparación simbólica a todos sus integrantes que se han visto afectados por la violencia, así como a sus familias. El propósito de este libro es dignificar la memoria de estas vidas, contando una historia que todos los colombianos deben recordar. Entendemos que el proceso de reparación es largo e integral y no es exclusivo de la institución castrense, al igual que tampoco se limita exclusivamente a la publicación de un libro. Por ello, proponemos que se entienda este producto académico como un eslabón más en la cadena de atención a

las víctimas y como la prueba material del compromiso que tenemos para atender integralmente a este personal.

Finalmente quiero señalar que este libro es un aporte a los debates sobre la memoria histórica que actualmente se vienen desarrollando en el país. Proporciona un insumo ausente en varias publicaciones académicas: la voz y la experiencia de los miembros de las Fuerzas Militares. En este caso particular, de la Armada Nacional de Colombia.

Almirante Leonardo Santamaría Gaitán
Comandante Armada Nacional

Palabras de inicio

Bajo el acertado liderazgo del Señor Comandante de la Armada Nacional, la fuerza vio la necesidad de crear una dependencia que tuviera como función principal el fortalecimiento de la integridad jurídica y la defensa institucional a través de lineamientos y directrices que permitieran atender todos los requerimientos procedentes de cualquier tipo de organismo de carácter nacional o internacional, protegiendo, en todo caso, los intereses institucionales así como los de sus miembros.

Por honrosa destinación del alto mando naval, tengo el honor de comandar desde el 16 de junio de 2016, fecha de su creación, la Jefatura Jurídica Integral de la Armada Nacional; Jefatura multifacética, tripulada por Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina y personal no uniformado, que cuentan con el conocimiento, las capacidades, las competencias, pero sobre todo, el espíritu de servicio necesario para llevar a puerto seguro la misión encomendada.

Una de las principales funciones de esta Jefatura, es la que cumple por medio de la Dirección de Víctimas, Memoria Histórica y Justicia Transicional (DIVIM). Dirección que tiene la gran responsabilidad de recopilar y construir la memoria histórica institucional, estructurar iniciativas legislativas en desarrollo de los instrumentos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero más que nada, la de visibilizar a nuestros marinos y sus familias, quienes en el desarrollo de operaciones que tenían como único propósito el de mantener el Estado

de derecho, han resultado afectados como consecuencia de un hecho heroico, pero que de manera valerosa siguen luchando por sus sueños y el de sus seres queridos, muchas veces alejados de sus hogares o enmarcados en los fríos pasillos de un hospital.

Durante más de un año, esta Dirección a través de la División de Víctimas, apoyada por la Universidad Santo Tomás y bajo el rigor académico que caracteriza a este claustro, centró sus esfuerzos en conocer el sentir de nuestras víctimas producto del conflicto, quienes a través de sus relatos y crónicas decidieron consignar su verdad; sin caer en halagos ni pretensiones, nos pidieron plasmar en este libro su clamor, de ser reconocidos, comprendidos y exaltados, por un país que a veces olvida muy rápido.

De esta manera, la Armada Nacional pretende tocar el corazón y la razón de nuestra sociedad solidaria, la academia y de los organismos tanto nacionales como internacionales, para reconocer en estos héroes la importancia de su espíritu altruista como el de cualquier colombiano, y su extraordinaria capacidad de sacrificio, quienes una vez juraron defender el azul de nuestra bandera, otorgando su legado máspreciado, ¡SU PROPIA VIDA!

Contralmirante Camilo Hernando Gómez Becerra
Jefe Jefatura Jurídica Integral de la Armada Nacional

Presentación

Esta publicación surge del convenio de investigación celebrado entre la Armada Nacional de Colombia y la Universidad Santo Tomás N° 977 en el año 2016, alianza que demuestra que es posible generar puentes y espacios de comunicación entre la academia y otros sectores de la sociedad; en este caso la Armada Nacional de Colombia, y con el propósito conjunto de construir una memoria incluyente, en la que todas las voces tengan cabida y que se construyan escenarios de paz a partir de los reconocimientos que cada actor perciba, y generando procesos de resignificación de las vivencias en los territorios, una forma, tal vez simbólica, de construir la paz territorial.

La articulación entre estas dos instituciones va más allá de este libro resultado de un proceso de investigación sobre la “Reconstrucción de narrativas de las víctimas de la Armada Nacional reconocidos como víctima por la Ley 1448 de 2011”, esperando que se desarrollen diálogos de saberes entre la experiencia en terreno que desarrollan los miembros de la Armada Nacional de Colombia, con los procesos de investigación y reflexión sobre el conflicto armado interno que se ha liderado desde las líneas de investigación: Conflicto, política y democracia; Desarrollo, políticas públicas y planeación participativa; Subjetividades, acción colectiva y transformación social; del grupo de investigación “Conflictos sociales, género y territorios” de la Universidad Santo Tomás, que se ven reflejados en nuevos proyectos

de investigación, espacios curriculares y en la proyección social de nuestra institución.

Por todo lo anterior, es un placer presentar ante la comunidad académica y la sociedad, en especial a los integrantes de la Armada Nacional, este texto en el que se reconstruyen los relatos de vida de unos miembros de esta institución que tuvieron que trasegar en medio de la hostilidad y la violencia, poniendo en riesgo su integridad personal para cumplir con los propósitos constitucionales.

A través de los relatos hay un acercamiento a las dinámicas y consecuencias del conflicto, a la tragedia humana de las hostilidades, y a la irregularidad de las prácticas desarrolladas por los combatientes. Pero también, hay ventanas hacia la esperanza, hacia el perdón y la reconciliación de aquellos que han tenido que padecer las peores consecuencias tras estos más de 50 años de violencia.

En el escenario actual que atraviesa el país, es importante comprender las posiciones de las partes, entendiendo los sacrificios y sufrimientos que tuvieron que padecer, como un mensaje claro para las futuras generaciones que no deben repetir estos años de barbarie y destrucción. Al contrario, este libro es una invitación a humanizar a los combatientes, a dimensionar de otra forma el conflicto armado colombiano, valorando sus vivencias, sus sueños y el sacrificio de sus familias.

Como División de Ciencias Sociales, y en particular desde la investigación desarrollada por los grupos de investigación, se ha entendido que la construcción de ejercicios de memoria histórica es una oportunidad para generar encuentros entre las partes, para comprender las posiciones y acciones del otro, y a partir de ello, poder generar espacios de diálogo y acercamiento mutuo.

Así, la memoria es un espacio de inclusión, de reconocimiento de las diferencias y de construcción de oportunidades de interlocución entre aquellos que se entendían como contrarios. En ese sentido, la memoria es una herramienta fundamental para la reconciliación entre los colombianos, para que se abolan las posturas radicales y estigmatizadoras que niegan política y simbólicamente al otro, negándole la oportunidad de ser una contraparte política y democrática.

Agradezco a la Armada Nacional de Colombia por este espacio de aprendizaje, en el que los integrantes del equipo de investigación reconocieron una nueva cara del conflicto armado, y tuvieron una nueva valoración del papel desarrollado por esta institución en el

decurso de la historia reciente del país y su aporte a diversos procesos que se han llevado a cabo en las regiones colombianas, además del compromiso de involucrarse en la transformación para que nuestra sociedad sea más pacífica y respetuosa con la diferencia.

Fray Esneider Claros Castro O. P.
Decano División de Ciencias Sociales

Introducción

Las dinámicas del conflicto armado colombiano han generado profundas consecuencias humanitarias, como sea que los métodos y estrategias empleados por los actores armados han desbordado los marcos consagrados dentro de la normatividad internacional. Así, el recuento del conflicto enuncia las peores acciones contra la población civil y las más duras situaciones contextuales.

Si bien la sociedad aún está en el proceso de reconocer y dignificar a las víctimas del conflicto armado, se ha iniciado una reflexión pública a través de las acciones legales y simbólicas que se desprenden de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) así como las transformaciones administrativas y políticas del Estado para dar cumplimiento a la misma. Estas acciones han supuesto un debate transicional sobre el papel de las víctimas en el proceso de superación del conflicto y un desarrollo de esclarecimiento sobre las verdaderas dinámicas violentas que se han dado en las últimas décadas.

Pese a este proceso de reconocimiento a las víctimas, el debate sobre la condición de víctimas de los miembros de la Fuerza Pública ha avanzado con menor velocidad y ha tenido poca acogida en algunos de los escenarios académicos. Así mismo, aunque existe una voluminosa producción sobre el conflicto armado, pocos centran su atención sobre los contextos y marcos significativos que provienen de estas instituciones policiales y militares.

En el marco del cumplimiento de su misión constitucional, la Armada Nacional de Colombia enfrenta múltiples situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de sus miembros, sin importar la especialidad en la que estos se encuentren. La mayoría de estos sacrificios se convierten en historias anónimas, desconocidas por la sociedad, que no entiende ni comprende los retos que debe enfrentar a diario un militar colombiano.

Muy recientemente, en el año 2014, comenzó el debate jurídico y académico sobre la condición de víctimas que pueden tener algunos miembros de la institución cuando reúnen los requisitos consagrados en la Ley 1448 de 2011, debates técnicos que han sido pioneros en generar una reflexión pública sobre el accionar de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el propósito de este libro va más allá de lo estipulado dentro del concepto jurídico de “víctima”, proponiendo un debate público más amplio e integral, desde el ámbito interpretativo del concepto de “afectación” en el marco de la prestación del servicio.

Por tal motivo, el presente libro sintetiza, desde tres lenguajes distintos, este sacrificio y afectación buscando generar incidencia en diferentes escenarios y públicos. En la primera parte del documento, se encuentra un análisis de contexto, en el que se reflexiona académicamente sobre los contextos sociales, económicos y políticos de dos regiones en las que ha operado la Armada Nacional: los Montes de María en el departamento de Bolívar, y el Pacífico colombiano en la subregión denominada Pacífico Centro. En estos entornos se comprenden sucintamente las dinámicas de seguridad que obligaron a la institución a hacer presencia en estas regiones, a pesar del alto riesgo que representaba para sus integrantes.

En el segundo capítulo, se presentan en un lenguaje periodístico (tipo crónica) diez relatos de vida de personal de la Armada Nacional de Colombia; allí convergen las distintas especialidades y grados de la institución bajo un común denominador: la afectación en el marco de la prestación del servicio. Este capítulo busca sensibilizar con un lenguaje directo y espontáneo, sin ninguna pretensión académica.

Finalmente, el tercer capítulo hace un análisis antropológico sobre la condición de víctima, afectado y sobreviviente, recogiendo las conclusiones de los dos contextos y los valiosos testimonios brindados

por 30 militares de la Armada Nacional¹. Es un capítulo de cierre, en el que las narrativas militares permiten generar reflexiones sobre cómo hacer ejercicio de memoria histórica en Colombia, y en especial, siendo respetuosas e incluyentes con el honor y la cultura militar.

Como conclusión, el lector se encontrará con una estructura encaminada a que la sociedad dimensione desde distintas posiciones y lenguajes lo que significa ser miembro de la Armada Nacional de Colombia, los servicios que esta institución le presta al país, y los riesgos a los que se enfrentan sus miembros –y que implica arriesgar la integridad personal– al operar en la geografía nacional.

En términos de memoria histórica esto es un debate fundamental, porque se deben reconocer en este debate público las distintas posiciones y percepciones de los diferentes actores, construyendo un discurso inclusivo y democrático que permita que la sociedad tenga unos referentes amplios y unos objetivos para enfrentar el proceso de esclarecimiento de la verdad, que eventualmente tendrá que desarrollarse en el marco de la búsqueda colectiva de la paz.

1 Se realizó un trabajo de campo en tres regiones del país (Bogotá, región Caribe y región Pacífico), aplicando un instrumento de investigación semiestructurado a 30 miembros de la institución seleccionados por la Dirección de Víctimas de la Armada Nacional de Colombia.

Contextos sociales: las dinámicas del conflicto armado

Introducción

El conflicto armado colombiano no se ha presentado de forma constante y homogénea en todos los territorios, por ello, cualquier intento de generalización carece de validez académica. Así, aunque los actores armados, económicos y políticos son los mismos, las relaciones que entablan, los móviles de la confrontación y la interacción con la población civil será diferente en cada uno de estos territorios.

De igual manera, las Fuerzas Militares tienen unas formas distintas de relacionarse con el conflicto y sus actores, dependiendo del contexto específico en el que se mueven; por ello, como se verá en este capítulo, la forma de actuar de una institución como la Armada Nacional difiere completamente entre la región Caribe –especialmente en los contornos de los Montes de María–, a la forma como opera en la región Pacífico.

Tres elementos puntuales sustentan esta afirmación: en primer lugar, hay unos elementos geográficos y físicos que distancian profundamente a estos dos territorios. En el caso del Pacífico, se trata de una región estructurada por una densa red fluvial, allí los ríos son el componente central y a través de sus cauces, ha girado la vida y el conflicto de sus comunidades. Son ríos que se conectan con un mar enorme, y

que en esa conexión permiten un tráfico permanente de personas y de mercancías, algunas de ellas ilegales y generadoras de violencia.

En el caso de los Montes de María, una región montañosa con una espesa capa vegetal, los Infantes de Marina se salieron de su medio natural para hacer frente al conflicto que afectaba a la región, transformando su forma de operar y de relacionarse con el territorio y con las comunidades.

Una segunda variable a considerar, está en las dinámicas de seguridad que tuvo que enfrentar la Armada Nacional. En el primer territorio (el Pacífico), el tráfico de narcóticos y la relación que este negocio ilícito creó con los diversos actores, fue el centro del conflicto y por tal razón, de la operatividad de esta institución. En el caso de los Montes de María, aunque también estaba presente esta economía ilegal, otras dinámicas derivadas del control del territorio y de la coacción a la población civil, configuraron la misión particular.

Finalmente, aunque en los dos territorios delinquían los mismos actores armados, estos transgredían la ley de manera distinta y particular. Si se toma el ejemplo de las Farc, hay que señalar que el Frente 37 (en la región Caribe) hizo del uso de artefactos explosivos no convencionales una característica central de sus acciones contra la población civil y contra las Fuerzas Militares; a su vez, los frentes que operaban en el Pacífico articularon estrategias destinadas a generar un control ilegal sobre los principales ríos. Esto se asume desde una perspectiva humana y vivencial en el siguiente capítulo, en el que se parte de los relatos del personal afectado por cuenta del conflicto armado y de los sacrificios personales y familiares que debieron realizar en tan difíciles y complejos escenarios.

De esta manera, en este capítulo, el lector encontrará una rápida revisión de los elementos más significativos y característicos de estos dos contextos sociales, acompañados de una descripción de las situaciones de conflicto; contextos que permitirán que se comprendan los múltiples escenarios operacionales en los que la Armada Nacional debe desempeñar su misión constitucional; y también, contextualizar los relatos de los miembros de la institución, los hechos victimizadores que debieron enfrentar y los retos futuros en materia de seguridad.

El conflicto armado en la región Caribe. Los Montes de María

a) El Bloque Caribe de las Farc. Expansión territorial y retaguardias estratégicas

La presencia de las Farc en la región Caribe está marcada por dos momentos históricos distintos, diferenciados por el grado de organización y la presencia territorial de sus frentes a lo largo de la región. El primer momento (década del setenta) está caracterizado por la presencia del Frente 35, que funcionaba de manera descentralizada y que heredó la tradición de algunas guerrillas liberales que actuaron en esta región desde comienzos del siglo XX, especialmente en los departamentos del Atlántico, Magdalena y en el sur de Bolívar.

Durante ese período histórico, la organización armada basaba su funcionamiento en unas dinámicas de microcriminalidad, vinculadas al negocio de la cuatrería (en las zonas ganaderas de la región), a la vinculación con el contrabando y el negocio de los ‘marimberos’, y a la extorsión a los negociantes de la zona. Estos procesos de financiación limitados y escasos serán la explicación de una capacidad de generar acciones armadas de menor escala, y de tener un nivel de hostilidades menor al del resto del país (CNMH, 2013).

Esto contrasta con la situación que se vivió en la década del ochenta en la zona sur de los departamentos de Sucre y de Córdoba (zonas fronterizas con el norte antioqueño y Santander), donde confluye el cinturón del Magdalena Medio, y en donde el accionar de las Farc se centró en generar extorsiones y hostigamientos en contra del sector ganadero y algodonero de la región; lo que devino inmediatamente en una reacción violenta por parte de actores ilegales vinculados a estos sectores económicos y que crearon una amalgama social en la que el binomio “subversión / antisubversión”² marcó índices de violencia mucho más elevados que los que se estaban viviendo en el norte de la región. En ese sentido, es importante hacer esta distinción

2 Es importante señalar que cuando se usa el término subversión, se hace desde un marco interpretativo sociopolítico, es decir, como lo usaban y lo entendían en ese momento histórico los actores sociales. No se emplea desde los referentes conceptuales del Derecho Internacional Humanitario.

entre la situación que se vivía en la década de los ochenta en la región Caribe, estableciéndose la convivencia de dos grandes subregiones al interior de la misma: la primera en la zona norte, caracterizada por una menor capacidad de acción de las Farc, y en menos tensión con la sociedad civil; y una segunda en la zona sur del Caribe, enclavada en el vórtice del Magdalena Medio, y que haría que esta organización hiciera parte de una gran violencia multiactoral que traería lamentables consecuencias para la población civil y para el desarrollo socioeconómico de la subregión.

Para buscar marcos interpretativos que permitan entender esta diferenciación y este desinterés estratégico que demostraron las Farc con la zona norte de la región, vale la pena remitirse a las conclusiones propuestas por Fernando Cubides en el texto *El municipio y la violencia en Colombia* (1998), en donde señala que hay una ecuación dentro del conflicto armado colombiano: los actores armados centran su atención e interés en los territorios en los que hay presencia de recursos que vale la pena apropiarse, o donde logran ventajas estratégicas territoriales (corredores de movilidad, enclaves entre frentes o bloques, o desestabilización de otros actores armados). En ese sentido, Cubides evidencia que detrás de las aparentes tensiones ideológicas lo que se encuentra es una lógica económica que orienta la focalización del conflicto armado.

“A partir de los años ochenta todos los grupos guerrilleros, incluidas las Farc, una vez consolidadas sus áreas de influencia en las regiones de colonización concebidas como retaguardias estratégicas, dan un salto hacia regiones con significación en el plano económico, con objeto de buscar control directo en la explotación de recursos naturales o la extorsión a sus productores” (Vicepresidencia de la Republica, 2001, citado por Porras 2014, p. 364).

Desde esta perspectiva analítica, en la década de los ochenta el norte de la región Caribe reportaba unas condiciones socioeconómicas que no eran favorables para el accionar de las Farc: una economía que giraba en torno a los puertos y al sector turismo, lo que implicaba una alta presencia del Estado y sus instituciones (entre ellas las militares), y a la par, unos cinturones de miseria que bordeaban estos grandes enclaves económicos, y en donde el tipo de accionar que desarrollaba esta organización no le permitía generar réditos económicos o estratégicos significativos.

Caso contrario sucedía en el sur de la región, en donde los sectores ganadero y algodónero estaban en un auge económico sin precedentes en la historia del país (Aguilera, 2004), con unas condiciones de regulación y presencia del Estado mucho más limitadas, y con la existencia de unas comunidades campesinas que tenían profundas tensiones con las estructuras del latifundio y los grandes hacendados, creando contradicciones sociales que le permitieron a las Farc generar unas relaciones y unas bases sociales. Allí, ubicaron a los frentes 37 y 41, los cuales hicieron un ejercicio de concentración de hombres provenientes de Antioquia y Santander para tener mayor presencia armada en este contexto territorial.

El Observatorio de Paz Integral (2008) realiza un mapa muy didático y esclarecedor sobre la forma en la que esta organización intentó tener una presencia más fuerte en esta región del país, planteando que hubo un movimiento de enroque, en el que trataron de concentrar fuerzas en el vórtice de los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar y Santander (enclave norte del Magdalena Medio), entendiendo que esta era una oportunidad estratégica para conectar al sur con el norte del país, intentando apoderarse del que, en ese momento, era el mejor corredor de movilidad existente. La historia de esta organización durante el período histórico objeto de esta investigación se concentraría en ubicar sus frentes en la búsqueda de armar corredores estratégicos que les permitiera garantizar la movilidad y tráfico de armas y narcóticos entre sus estructuras; a esto se le denomina el “enfoque territorial del conflicto armado”, que es el que interesa en esta investigación (Vásquez, 2013).

Cuando se produce el intento fallido de acuerdo de negociación con el Gobierno de Virgilio Barco Vargas y se produce la Operación Colombia por parte de las Fuerzas Militares (en el marco de la denominada “guerra integral”) en contra del Secretariado de esta organización, se produce una transformación morfológica, estratégica y violenta dentro de la misma. En esta transformación, que queda plasmada en la Octava Conferencia de las Farc desarrollada en abril de 1993, la organización enarbola un plan de crecimiento y expansión territorial, que traería profundas consecuencias sobre las dinámicas del conflicto armado, en la medida que:

Dentro de los planteamientos trazados en la reunión se resaltó, en lo militar, el establecimiento de sesenta frentes y

el cubrimiento casi total del territorio nacional, superando así, el objetivo planteado en la Octava Conferencia de alcanzar los cuarenta y ocho frentes. Sin embargo, es posible que la primera cifra sea ligeramente menor, pues en la lista de asistentes a la conferencia se incluía aparte de los cincuenta y tres delegados de frentes rurales, a tres representantes de frentes urbanos, otros tres de la “guardia del Secretariado” –que, debido a la cantidad de miembros, seguramente se asimilaban a frentes– y dos delegado más de la OP –desconocemos el significado de esta abreviatura, pero podría corresponder a Organización Política–. (CNMH, 2013, p. 180).

Por supuesto, los resultados de esta conferencia afectaron a todo el país, incluyendo a la región Caribe, en donde hubo un incremento del número de hombres, de recursos y de intencionalidad de ataque por parte de las Farc, que intentó copar todo el territorio de la región, entrando en confrontación con el Estado y con otros actores ilegales que hacían presencia en la zona, tales como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y estructuras vinculadas a las formas de autodefensa ilegal, que pronto se cobijarían bajo el ropaje de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Después del año 1995 se presenta un incremento en las acciones de las Farc en la región como resultado de la entrada del denominado Bloque Caribe, que fue creado para ocupar zonas de puertos y de expansión minera (legal e ilegal), entendiendo que allí había unos recursos y unos poderes que esta organización quería apropiarse. Con el Bloque, se fortalecieron los frentes 35 y 37 (el primero ocupó la zona nororiental de la región y el segundo la noroccidental). El actuar del Frente 35 se vio reflejado en las formas de violencia que se presentaron en el sur de Bolívar en la región ganadera de Córdoba y Sucre; en el caso del Frente 37, este actuó en la región de La Guajira y Magdalena, en contacto con los frentes que delinquían en la zona del Catatumbo en el norte de los Santanderes (Echandía, 1998).

Célebres son las acciones violentas realizadas por estos dos frentes, que intentaron generar desconexión entre las vías de comunicación que conectaban la región, atacando las vías principales y las conexiones fluviales con métodos que en la mayoría de los casos eran irregulares (uso de artefactos explosivos no convencionales) y que

usaban en contra de la población civil y de la Fuerza Pública (CNMH, 2016).

Los relatos recabados con los Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina de la Armada Nacional afectados por el conflicto armado, documentan cómo estos frentes crearon una tecnología artesanal, rudimentaria y asesina para atacar a la población civil y a soldados y policías.

Todo empezó con lo que ellos llamaban el ‘sombrero chino’, haga de cuenta como una mecha de tejo gigante que explotaba y mataba al que estuviera cerca; luego vinieron los ‘balones’ o ‘bolas de fuego’, que como su nombre lo indica eran esferas cargadas de explosivos que ponían a correr en contra de nosotros y que eran muy difíciles de esquivar; después entraron en una estrategia de poner pequeñas minas para impedir que la tropa entrara, ellos decían que para qué tanto explosivo si igual jodían a la tropa. Luego este ‘Martín Caballero’ buscó cómo perfeccionar todo eso: hizo más rápidos los cilindros de gas, repletos todos de metralla, les metió estiércol y heces humanas para generar infecciones, en fin. Ese tipo entendió que no tenía sentido pelear de frente, que haciéndonos volar era suficiente. (Entrevista a Infante de Marina de la Armada Nacional, 2016).

Por ello, el nombre de “Martín Caballero” está asociado con los peores crímenes cometidos por las Farc, y está íntimamente ligado con la estrategia ilegal desarrollada por esta organización en la década de los noventa, que le permitió generar altos niveles de daño, sin necesidad de vincular un gran número de hombres armados.

En el año 2007, las inteligencias de las distintas instituciones de la Fuerza Pública se concentrarían en detectar a este cabecilla, identificando el momento preciso para desarrollar una operación militar que permitiera su captura; sin embargo, el Frente 37 sembró de minas antipersonales la zona en la que él se resguardaba, impidiendo la entrada de los hombres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Ello obligó a que se desarrollara una intervención integral por parte de la Infantería de Marina, por medio de la Brigada de Infantería de Marina N° 1:

Unidad operativa menor con el propósito específico de neutralizar el narcoterrorismo, con personal comprometido para cumplir los objetivos institucionales, respetuosos de los derechos humanos, buscando siempre los resultados, para consolidar los Montes de María sin amenaza terrorista. Desarrollando operaciones de combate regular e irregular dentro del marco estratégico y/o táctico, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la soberanía nacional, el control territorial, la seguridad de la población y sus recursos en la jurisdicción comprendida entre los departamentos de Sucre y Bolívar. (Armada Nacional de Colombia, 2015).

El desarrollo de operaciones militares conjuntas permitió neutralizar al Frente 37 y al accionar irregular que este generaba; gracias a esta acción, desarrollada principalmente por la labor de inteligencia que adelantó la Armada Nacional, se posibilitó que se diera un cambio significativo en las dinámicas de seguridad de la región y que se debilitara definitivamente el accionar de este grupo armado.

Sin embargo, como se verá en los relatos y crónicas que se presentan en el segundo capítulo, esta victoria implicó un gran sacrificio institucional, que le costó la vida a un gran número de miembros de la Armada Nacional y unos riesgos enormes contra la integridad física y psicológica de los mismos.

Las Farc ingresaron a la región en el año de 1985, ubicándose en la serranía de San Jacinto con el Frente 37, proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta (departamento del Magdalena) y de la serranía del Perijá (departamento del Cesar), buscando el control territorial de las zonas montañosas de la costa y conformando el Bloque Caribe. El Frente 37 de las Farc estuvo históricamente comandado por Gustavo Rueda Díaz, alias 'Martín Caballero', abatido por operaciones de las Fuerzas Militares de Colombia en el año 2007; este hecho dio lugar al debilitamiento estructural de las Farc en la región. (De los Ríos, Becerra, Oyaga, Equipo Ilsa, 2012, p. 12)

Después de esta intervención militar, la presencia de las Farc en la región Caribe quedó virtualmente reducida a su mínima expresión, así como la presencia de otras estructuras armadas similares

que delinquían en las décadas del ochenta y del noventa, haciendo que la región Caribe se comportara como un escenario idóneo para realizar proyectos piloto sobre temas de seguridad en contextos de posconflicto, poniendo de presente otras problemáticas de seguridad que tendrán que ser atendidas por el Estado en un eventual proceso de desmovilización efectivo de las Farc.

Al respecto, debe señalarse que las formas de delincuencia vinculadas al narcotráfico o la incorporación de antiguos combatientes de las Farc en organizaciones del crimen organizado, serán los desafíos que tendrá que atender la Fuerza Pública y que implicará la redefinición de las capacidades institucionales de entidades como la Armada Nacional en esta región del país, por ejemplo a través del fortalecimiento de la “Acción Integral”.

b) El ELN: dinámicas temporales y territoriales

La presencia del ELN en la región Caribe es mucho más antigua que la de las Farc, ya que esta región hace parte de los territorios originarios en los que empezó la incursión armada de esta organización, que nace en la región del Magdalena Medio santandereano y hace su primera expansión territorial hacia el norte del país, puntualmente hacia los departamentos de Bolívar y Magdalena, en donde, según su postura ideológica, la explotación minera y portuaria generaba grandes beneficios para el capital extranjero en perjuicio de los trabajadores nacionales y de las rentas que deberían quedar en manos del Estado colombiano.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene sus orígenes hacia comienzos de los años sesenta, cuando surgió en el Magdalena Medio santandereano, en el área correspondiente a Simácota, San Vicente de Chucurí y El Carmen. Su planteamiento inicial consistió en tratar de pasar de los grupos de pequeñas guerrillas, que actuaban en las zonas de frontera agrícola lejos de los polos de desarrollo y de los centros del poder, a crear columnas guerrilleras en zonas con mayor población y actividad económica. El área de influencia, en los primeros años, alcanzó a comprender parte de los departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar (Fundación Ideas para la Paz, 2013, p. 6).

De hecho, dentro de los discursos liminares del ELN se encuentra siempre una semblanza a los acontecimientos ocurridos en el

municipio de Ciénaga (Magdalena) en el año 1928, cuando se presentan las protestas obreras contra la United Fruit Company, por las presuntas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores; las llamadas “masacre de las bananeras” en el Magdalena y “masacre contra los trabajadores de las vías férreas” en Barrancabermeja, son los hitos históricos en los que se fundamenta el discurso de liberación nacional y soberanía territorial de esta organización; razones históricas que fundamentan el peso simbólico que tuvo la región Caribe para esta organización irregular.

A finales de la década del setenta y comienzos de los años ochenta, el ELN concentra sus acciones armadas en contra de la infraestructura minero-energética, principalmente contra los oleoductos. Adicionalmente, desarrolla estrategias de intimidación y extorsión a las compañías petroleras que hacían presencia en Colombia. Por ejemplo, para el año 1983, el ELN desarrolla 35 acciones violentas contra la red de oleoductos del país, siendo uno de los años en los que mayor número de acciones irregulares de este tipo desarrolló esta organización, muy por encima de las capacidades de acción que tenían en ese año las Farc (CNMH, 2013).

Sin embargo, para la segunda mitad de la década de los ochenta, esta organización armada decide incursionar en otros territorios y en otros sectores económicos en los que, según ellos, se presentaban formas de usurpación de la riqueza nacional. Ello los lleva a buscar zonas con presencia minera, explotadas por operadores internacionales, concentrándose en las zonas mineras de los departamentos de Bolívar y Antioquia.

En un segundo período, a partir de los años ochenta, el auge del ELN se expresa en su acelerada expansión hacia nuevos objetivos. En el marco de la denominada Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, llevada a cabo en 1983, la organización decidió doblar las estructuras existentes, con el propósito de extender su presencia principalmente hacia las zonas con elevada riqueza minera y de explotación petrolera ((Escobedo, et al, 1997)).

Su presencia en Bolívar se va a hacer más fuerte, luego de los hallazgos de yacimientos de oro en el sur del departamento, en la zona de los Montes de María, que le permitió financiar sus estructuras armadas por casi media década. Esto se expresa en la posibilidad rápida que tuvo esta organización de conformar los denominados Frente de Guerra Norte y Frente José Solano Sepúlveda en el área del

Magdalena Medio del sur de Bolívar, especialmente en la serranía de San Lucas; estos entraron a complementar la acción que desde unos años atrás desarrollaba el Frente Camilo Torres en el departamento del Cesar.

Todo este crecimiento hizo parte de una estrategia de guerra concebida por el Comando Central (COCE) para hacerse con zonas y enclaves que eran fundamentales para generar controles y dominios territoriales. Sin embargo, esta estrategia de crecimiento coincidió con la desarrollada por las Farc y por el auge que llegaron a tener las autodefensas ilegales en esta región y que se tradujeron en enfrentamientos entre todos los actores ilegales, incluso entre los dos grupos guerrilleros.

A la par, esta estrategia del ELN buscó consolidar unas bases sociales y políticas en las regiones donde actuaba, esfuerzo político que llevó a que los otros actores armados vincularan a la población civil al conflicto, y a que se produjeran por ello incursiones armadas como las de El Salado, para citar una de las más tristemente célebres.

En 1986, en el I Congreso denominado Comandante Camilo Torres, se adoptó una nueva estrategia militar, enmarcada en el modelo de la guerra popular prolongada. Este esquema era complementario a la creación de los frentes de guerra y de las llamadas áreas estratégicas que correspondían a espacios de disputa y confrontación que la organización consideraba importantes por sus recursos económicos, políticos y sociales. Durante este año la organización aceleró su crecimiento (Fundación Ideas para la Paz, 2013).

Sin embargo, este crecimiento se vio truncado por los choques que tuvo con las Farc en la zona de los Montes de María (sur de Bolívar) cuando esta organización conformó el Bloque Caribe. Esta confrontación redujo la capacidad armada del ELN y le llevó a buscar zonas de retaguardia en regiones donde había cultivos de algodón y en zonas ganaderas (norte de Sucre y departamento de Córdoba), territorios en los que empezaban a emerger una serie de estructuras armadas ilegales antiguerrilleras y que desataron una guerra contra las Farc y el ELN (CNMH, 2013).

Esta situación dejó a esta organización en una situación estratégica muy compleja para la década de los años noventa, ya que no tenía territorios de retaguardia propios y estaba amenazada por los grupos ilegales y debía enfrentar las operaciones que desarrollaba la Fuerza Pública. Esto obligó a la organización a reforzar su aparato

armado y económico, recurriendo a estrategias como el secuestro y la extorsión para conseguir sus propósitos; aunque también llevó a que perdiera el trabajo de conformación de bases sociales que había intentado consolidar en la región.

Es importante señalar que hacia finales de la década de los años ochenta, el ELN es la organización guerrillera que registra el mayor número de secuestros, de los cuales una parte importante persigue objetivos de tipo político y propagandístico. Esta modalidad de secuestro se convirtió en un instrumento de presión, que en el ámbito local y regional le permite al grupo guerrillero intimidar a funcionarios del Estado, dirigentes políticos y candidatos a alcaldías y concejos, con el propósito de ejercer influencia en los poderes locales en las zonas donde ampliaba su presencia. (Echandía, 2013, p. 23).

La Fundación Ideas para la Paz (2013) señala que esta estrategia le permitió al ELN tomar un segundo aire en la región, fortaleciendo el Frente Norte con la aparición de los frentes Francisco Javier Castaño en Magdalena, Héroes y Mártires de Santa Rosa en el sur de Bolívar y Manuel Fernández en Córdoba, y con el aumento cuantitativo del número de hombres armados por cada frente, que pasó de 75 a 85 entre 1990 y 1994. Para la segunda mitad de la década del noventa, la avanzada llega a la conformación de los siguientes frentes: el Frente de Guerra Norte, el tercero más activo, que logra afectar el recorrido del oleoducto Caño Limón-Coveñas a través de los frentes Alfredo Gómez y Jaime Báteman. En el norte del Cesar se localizan los frentes José Manuel Martínez Quiroz y Seis de Diciembre. En la zona bananera del Magdalena el Frente Francisco Javier Castaño. En el sur de Bolívar los frentes José Solano, Héroes de Santa Rosa y Luis Fernando Vásquez Ariza. El Frente Manuel Hernández en el Urabá antioqueño y chocoano. Hacia finales de la década de los noventa fueron creados, en la parte norte de Bolívar, el Frente Compañero Ricardo y en Atlántico, la regional Kaled Gómez Pardo.

Este panorama se transforma radicalmente para el final de la década del noventa, cuando las estructuras de autodefensa que delinquían en la región Caribe se aglutinan dentro de las AUC, y conforman el Bloque Norte, uno de los más poderosos de esta organización, y que va a derrotar en el terreno armado al ELN y lo va a expulsar de esta región,

replegándolo a la zona del Catatumbo y a una presencia marginal en el departamento de La Guajira, en donde las condiciones naturales y topográficas no permiten el accionar ilegal de esta organización.

Hacia la segunda mitad de los años noventa, los grupos paramilitares o de autodefensa se localizaban principalmente en los territorios con presencia del ELN. La lógica de expansión de las llamadas autodefensas se inscribe en el propósito de consolidar una franja del territorio que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera controlar los escenarios de producción de coca localizados entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. A partir de esta franja, el Bloque Norte de las AUC controló hacia el norte los corredores a la costa Atlántica, Venezuela y Panamá, y en particular hacia el Chocó, Urabá, Sucre, Bolívar, Atlántico, la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la serranía del Perijá y los límites entre Colombia y Venezuela, desde La Guajira hasta Norte de Santander, pasando por el Cesar. La fuerte arremetida de las autodefensas profundiza la crisis que el ELN venía enfrentando debido a problemas de división interna y la desarticulación de las estructuras urbanas de la costa Atlántica y del Valle del Cauca, así como de los frentes Héroes de las Bananeras y Astolfo González, con presencia en Magdalena y Urabá, como consecuencia de la desmovilización hacia comienzos de los años noventa de la disidente Corriente de Renovación Socialista (Fundación Ideas para la Paz, 2013).

A esto, se suman las acciones y operativos desarrollados por la Fuerza Pública que terminan por diezmar a esta organización en la región Caribe. El último intento de demostración de fuerza de esta organización se produce entre los años 2000 y 2001, cuando el ELN desarrolló el mayor número de acciones armadas registrado en toda su historia, por medio de sabotajes que buscaban ejercer presión sobre el Gobierno para la desmilitarización de unos territorios para llevar a cabo la “Convención Nacional” e iniciar un proceso de paz con el Gobierno del presidente Pastrana. La posibilidad de adelantar un proceso de paz con el ELN, paralelamente con las negociaciones con las Farc, provocó una fuerte resistencia por parte de sectores de la población del sur de Bolívar que se oponían a la creación de una zona desmilitarizada para realizar esta convención entre la sociedad civil, el grupo guerrillero y el Gobierno (Fundación Ideas para la Paz, 2013).

Para el año 2015 es necesario reportar que aunque el ELN todavía tiene presencia efectiva en la región, su capacidad armada está muy reducida, toda vez que una buena parte de sus efectivos se

desplazaron a los departamentos de Santander y Arauca, en donde aún delinquen de forma significativa.

Pese a esto, y según entrevistas realizadas a miembros de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, esta institución sigue haciendo labores de inteligencia para prevenir que esta organización regrese a la región, y evitar así que entre en contacto con otras formas de delincuencia que persisten en esta zona del país.

c) Las autodefensas ilegales. Transformaciones morfológicas

El título de esta sección obedece a las permanentes fluctuaciones que tuvieron este tipo de organizaciones ilegales desde la década del ochenta hasta el presente, ya que comenzaron como grupos aislados y con ideales y móviles distintos articulándose bajo el nombre de Auto-defensas Unidas de Colombia (AUC), para, luego de la desmovilización –algunos de ellos–, seguir delinquiendo de forma desestructurada y con un apego muy fuerte al narcotráfico.

Las primeras formas de autodefensa ilegal que se desarrollan en esta región, están asociadas a la respuesta de ganaderos y hacendados por los constantes fenómenos de extorsión y secuestro que implementaron las Farc, el M-19, el EPL y el ELN en las zonas de influencia de estas actividades económicas. En el año 1982 se presenta un incremento inusitado en ese tipo de acciones delictivas y esto será la excusa para que un conjunto de hacendados y ganaderos se reúnan para conformar un grupo armado que enfrente esta amenaza.

Se conforma entonces una estructura armada denominada “Muerte a Secuestradores (MAS)”, que va a desarrollar acciones violentas en los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira dentro de la región Caribe, pero operando principalmente en el Magdalena Medio. La organización vinculó dinámicas irregulares de guerra, presionando a la población civil para que entregara información sobre los miembros de las organizaciones guerrilleras o de los sectores sociales que, según ellos, tenían vinculaciones con esos grupos armados.

En su corta duración, el MAS generó más muertes violentas contra la población civil que las que lograron perpetrar los grupos armados que pretendía perseguir, lo que le generó una mala relación con las comunidades y llevó a que los sectores económicos y políticos que los auspiciaron inicialmente, buscaran su transformación. Así, en

el año 1983 pasan a denominarse “Frente Paramilitar Independiente de Liberación (FPIL)”, pero inmediatamente asumen el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) nombre con el que actuarán por más de una década.

ACCU realmente era un nombre genérico para denominar a 22 estructuras armadas que intimidaron a la región Caribe, a parte del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y que tenían una consigna común: perseguir a los actores armados que intentaran introducir dinámicas de secuestro en los territorios en los que delinquían; en la siguiente tabla se señalan esas 22 estructuras armadas ilegales.

Tabla 1. Estructuras armadas vinculadas a las ACCU

	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
1	Autodefensas Campesinas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando (ACSMISF)
2	Bloque Cacique Nutibara (BCN)
3	Bloque Catatumbo (BC)
4	Bloque Centauros (BC)
5	Bloque Conjunto Calima (BCC)
6	Bloque Córdoba (BC)
7	Bloque Héroes de Granada (BHG)
8	Bloque Héroes de Tolová (BHT)
9	Bloque Héroes y Mártires de los Montes de María (BHMM)
10	Bloque Metro (BM)
11	Bloque Mineros (BM)
12	Bloque Pacífico (BP)
13	Bloque Suroeste Antioqueño (BSA)
14	Bloque Norte (BN)
15	Bloque Tolima (BT)
16	Bloque Bananero (BB)
17	Bloque Noroccidente Antioqueño (BNA)
18	Frente Capital (FC)
19	Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCIW)
20	Frente Héctor Julio Peinado Becerra (FHJPB)
21	Frente La Mojana (FM)
22	Frente Resistencia Tayrona (FRT)

Fuente: elaboración propia (2016), con base en la información del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional (2012).

Estas estructuras armadas lucharon contra las Farc y el ELN y les quitaron el control de espacios y territorios que eran fundamentales para el funcionamiento de estos grupos armados; los métodos empleados para luchar contra esas organizaciones fueron igualmente irregulares, y por ello tiende a sindicársele de ser el grupo responsable del mayor número de masacres perpetradas en la historia de Colombia (CNMH, 2011). Así mismo, se le ha acusado de no centrar su ofensiva en el enfrentamiento directo contra las estructuras armadas de estos grupos, sino en haber atacado a la población civil que consideraba cercana, auspicadora o colaboradora de estos grupos.

En los Montes de María, la aparición de las ACCU está ligada aproximadamente desde el año 1990 con muy poca participación, hasta que en el año 1996 las clases élite, junto con Salvatore Mancuso deciden proteger sus tierras de los frentes 35 y 37 de las Farc que tenían a esta población azotada con sus secuestros, extorsiones y crímenes indiscriminados. A partir de esta fecha (1996), se registra la primera masacre realizada por las autodefensas la cual tuvo lugar en El Guamo (Bolívar) con el asesinato de 4 personas. Desde este momento, empieza una lucha constante a muerte por el dominio de estas tierras entre las Farc y las AUC. (García, 2012, p. 68).

El otro gran grupo de autodefensas ilegales que delinquiró durante la primera mitad de la década de los años noventa fue el denominado Bloque Central Bolívar, que actuó en el sur de Bolívar (en la región de los Montes de María), enfrentando de forma directa a los frentes 35 y 37 de las Farc. Este bloque inició su actuar en el sur del país, pero incursionó luego en la zona norte en territorios que tenían presencia de las Farc; estaba conformado por 9 organizaciones armadas que se documentan más adelante.

Las tensiones y conflictos que se desarrollaron entre estas dos organizaciones y entre otros grupos de autodefensa ilegal que delinquían en Colombia, llevó a que se desarrollara un pacto entre estas, que devino en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 1996, bajo el liderazgo de Carlos Castaño Gil.

A partir de ese año –y quizás un poco antes–, las autodefensas ya habían perdido la dinámica exclusivamente antisubversiva y

Tabla 2. Estructuras armadas vinculadas al BCB

	Bloque Central Bolívar
1	Bloque Libertadores del Sur (BLS)
2	Bloque Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio (BNA)
3	Bloque Santa Rosa del Sur (BSS)
4	Bloque Sur del Putumayo (BSP)
5	Bloque Vencedores de Arauca (BVA)
6	Frente Cacique Pipintá (BCP)
7	Frentes Próceres del Caguan, Héroes de los Andaquíes y Héroes de Florencia (FPC)
8	Frente Héroes y Mártires de Guática (FHMG)
9	Frente Vichada (FV)

Fuente: elaboración propia (2016), con base en la información del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional (2012).

habían entrado en contacto con estructuras vinculadas al narcotráfico, lo que hizo que en su actuar empezaran a aparecer dinámicas de guerra que buscaban la concentración de tierras en manos de unos pocos. Esta estrategia ofensiva y violenta estuvo caracterizada por el desarrollo de distintas incursiones en cabeceras municipales y corregimientos, en donde se realizaron masacres y asesinatos selectivos en contra de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y población civil en general. Hubo distintas reacciones sociales y políticas contra esas organizaciones, pero estas siempre se defendieron detrás del argumento de que estaban atacando a unos enemigos armados, que se escondían y mimetizaban como población civil.

Las AUC partían de la base de que las comunidades rurales colaboraban con las guerrillas y por tal motivo no debían ser reconocidas como población civil sino como combatientes, por lo que no eran más que ‘guerrilleros de civil’, a quienes había que retirar del camino para debilitar y derrotar al enemigo. (Porrás, 2014, p. 367).

Entre 1996 y 2005 se perpetraron más de 300 acciones armadas por parte de las AUC en la región Caribe, según lo documentan las versiones libres entregadas por los desmovilizados de esta organización a

la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Estas acciones fueron cometidas en los departamentos del Atlántico, César, Magdalena y La Guajira, con un total de 1.573 víctimas reportadas (Verdad Abierta, 2009). Este informe periodístico aclara que no hay aún registros sistematizados de otras estructuras de las AUC, pero que si se cuentan las víctimas de Córdoba, Sucre y Bolívar, esta cifra fácilmente puede duplicarse, y la de las acciones violentas podría llegar a 500.

Así mismo, es necesario señalar que entre el 2000 y el 2005, previo a los procesos de desmovilización, la región experimentó uno de los momentos más violentos por cuenta de estas organizaciones ilegales. La explicación a este repunte de hechos violentos se explica por el intento de retorno a la región de las Farc y la reacción violenta que esto generó, por temor a que intentaran recuperar territorios que eran estratégicos anteriormente para esta organización.

La agudización del conflicto en la región se registra durante el período comprendido entre finales de la década de los noventa y hasta el año 2005. (...) La incursión y consolidación del paramilitarismo durante este período, se caracterizó por un conjunto de violaciones a los derechos humanos, adquiriendo carácter sistemático el desplazamiento forzado, las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, contra la población civil. (De los Ríos y otros, 2012, p. 6).

Después del proceso de desarme de las AUC, en el año 2005, la región ha visto cómo emergen nuevas formas de violencia, algunas de estas muy cercanas a las antiguas estructuras de las AUC, y todas ellas con el propósito de apoderarse de los territorios del narcotráfico, de la minería y de otras formas de apropiación de recursos que la zona ofrece; por ello, aun cuando en la región ya no delinque ningún grupo tradicional del conflicto armado colombiano, su lugar fue ocupado por estructuras armadas más pequeñas y locales, que monopolizan la producción de cultivos ilegales y siguen atacando violentamente a la población civil, ya no con el ropaje de un grupo de autodefensa “antisubversivo”, pero sí siguiendo sus prácticas, sus estrategias y sus objetivos.

d) Violencias y dinámicas territoriales: los Montes de María

Los Montes de María ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado colombiano, principalmente por la presencia de grupos al margen de la ley como las Farc y las AUC; esto ha generado tensiones y afectaciones de carácter social, político, ambiental, económico y cultural en el territorio y en la población civil. Desde una perspectiva histórico-estructural, puede evidenciarse que el fenómeno de violencia en la región obedece a unas luchas por el monopolio de la tierra, generando cuadros de violencia que se materializan tanto en desplazamiento forzado, como en afectaciones a la integridad física, simbólica y emocional de los habitantes. Pese al fenómeno de la guerra, el territorio de Montes de María ha sido escenario de acciones y movilizaciones de la población civil para protegerse de los actores armados ilegales.

En este sentido, se puede afirmar que los Montes de María es uno de los pocos territorios que se ha recuperado de las secuelas del conflicto, gracias a la intervención de organizaciones sociales, entidades públicas e instituciones del Estado (principalmente de la Armada Nacional).

Los Montes de María es una subregión del Caribe colombiano y está conformada por: "... los municipios de María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba (pertenecientes al departamento de Bolívar) y San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Tolúviejo (pertenecientes al departamento de Sucre)" (PNUD, 2010, p. 5).

La región de los Montes de María se ha caracterizado por ser la despensa de la región, y gracias a su privilegiada posición geográfica, ha consolidado relaciones productivas, agropecuarias y agroindustriales. Sin embargo, la ubicación estratégica y geográfica de la región favoreció la injerencia de diferentes grupos armados (desde la década de los setenta) con el fin de lograr el control territorial. Esto confluyó para desdibujar, debilitar y transformar completamente sus dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales.

La región ha pasado por diferentes episodios de violencia. Su proceso puede ser entendido a través de una mirada de largo plazo que evidencia su prolongación en el espacio-tiempo, es decir, desde la conquista española, la hegemonía conservadora, la violencia política bipartidista, la lucha de organizaciones armadas en los años sesenta y

setenta del siglo xx y la agudización de todo este conflicto con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los noventa. Finalmente la “recomposición de las antiguas AUC en grupos denominados ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’, las ‘Águilas Negras’ y el ‘Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC)’” (De los Ríos y otros, 2012, p. 11).

La génesis del conflicto actual se puede rastrear en los conflictos sociales que se produjeron en los años sesenta y setenta, que se caracterizaron por la fuerte presencia de la lucha agraria regional y que devino en la conformación de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) como una organización política, que tenía por objetivo “redistribuir la tierra, de manera que todos los campesinos tuvieran su parcela y que se respetara la vocación agrícola de las tierras fértiles que estaban siendo utilizadas para la ganadería” (PNUD, 2010, p. 7).

Los movimientos campesinos le apostaban a un modelo de desarrollo basado en una economía campesina, (cultivos de pancoger y producción familiar) el cual discrepaba con el modelo de desarrollo basado en la concentración de la tierra para la producción de extensos monocultivos y ganadería extensiva, propio de las élites del campo. Esto fue un factor dinamizador de violencia política, en donde los promotores del latifundio generaron acciones violentas irregulares contra las organizaciones campesinas y contra sus líderes. A pesar de que los campesinos quedaron en una situación de subordinación, no recurrieron a mecanismos violentos para exigir una redistribución más equitativa, accesible y democrática de la tierra. En este orden de ideas, el movimiento campesino de la mano con las juntas de acción comunal, sindicatos y ligas agrarias, se consolidó como un movimiento político. Sin embargo, según el PNUD (2010), el ímpetu campesino de los años sesenta y setenta marca una coyuntura importante de esta situación, ya que el conflicto por la tierra dio paso a un esquema represivo que algunos hacendados pusieron en manos de criminales entre los cuales se destacaron los llamados “penca ancha”, que finalmente dio inicio a un proceso sistemático de eliminación de dirigentes campesinos vinculados a organizaciones agrarias, especialmente de la ANUC.

Ahora bien, con el debilitamiento de la ANUC, se dio un giro en las manifestaciones de conflicto en la región, ya que al inicio de la década de 1980 apareció el fenómeno de las Farc en los Montes de María, a través del Frente 37. El territorio se convirtió en epicentro

de nuevos grupos armados ilegales; allí se asentaron las Farc, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y el ELN (PNUD, 2010). La presencia de nuevos grupos armados convirtió el territorio en un escenario de conflicto continuado que agudizó aún más el fenómeno de la violencia.

En medio de esta coyuntura, la ANUC continuó ejerciendo la toma de tierras y los procesos de organización social. Este fenómeno resultó ser de interés para las organizaciones armadas, que querían que las movilizaciones sociales se vincularan a sus actividades ilegales. Sin embargo, los campesinos rechazaron este intento de cooptación y las acciones por la vía de las armas, lo cual generó que la ANUC se convirtiera en el objetivo tanto de los grupos de poder como de las Farc. En consecuencia, se generó un conflicto político y lucha de clases ya que “la presencia de la guerrilla generó en las élites la percepción de nexos de las organizaciones sociales populares con los grupos subversivos” (PNUD, 2010).

Durante los años ochenta, las Farc ya se habían consolidado en el territorio, “conformando el Bloque Caribe y el Frente 37, el cual estuvo históricamente liderado por Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’” (Porrás, 2014), ejerciendo un destacado control sobre las dinámicas socioeconómicas, y generando dificultades en la región, ya que tenían como propósito explotar los recursos naturales, hostigar a los terratenientes, a la Fuerza Pública, a los campesinos y a sectores populares. De igual forma, robaron ganado y secuestraron ganaderos. En sus inicios la presencia de las Farc estaba orientada a realizar un trabajo político, sin embargo, la violencia generalizada y las afectaciones a la población civil aparecerían a finales de los ochenta. A raíz de estos hostigamientos por parte de esta organización, “se desarrollaron múltiples estructuras que posteriormente harían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), integradas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” (PNUD, 2010, p. 18).

La estrategia de expansión de las AUC se basó en llegar a todos los espacios copados por las Farc, en el fortalecimiento económico a través de la cooptación de recursos legales e ilegales y de las alianzas con élites pertenecientes a sectores políticos y económicos, para lo cual también liderarían el proceso de confederación con otras colectividades de autodefensa, dando vida así a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Porrás, 2014, p. 366).

A partir de la captura de la institucionalidad y de gobiernos locales y regionales de poder, la presencia de las AUC se agudizó en los años noventa desencadenando así la consolidación de nuevos grupos armados en la región y reproduciendo nuevos tipos de violencia. Dentro de estos grupos, estaban conformados tres subgrupos: “1. Frente Canal del Dique al mando de alias ‘Juancho Dique’, desmovilizado y condenado por la masacre de Mampuján en el marco de la Ley de Justicia y Paz; 2. Frente Central Bolívar, al mando de alias ‘Ramón Zabala’; 3. Frente Golfo de Morrosquillo, al mando de alias ‘Cadena’, desaparecido bajo extrañas circunstancias en la zona de concentración paramilitar durante los diálogos de Santafé de Ralito” (De los Ríos y otros, 2012, p. 11).

Sus objetivos estaban orientados a dos puntos fundamentales que conllevaron a la aparición de nuevos conflictos de carácter político y económico. En primer lugar buscaban reforzar y recuperar el control territorial en una región que hasta entonces había sido escenario de otros tipos de luchas. En ese sentido, las AUC entrarían en un proceso de rediseño de su estrategia de violencia, ya que enfrentar a las Farc suponía reinventar su forma de actuar, más aún en un territorio montañoso y desconocido para ellas como lo eran los Montes de María. Esto conllevaría a generar expresiones de violencia y así mismo un escenario de confrontación permanente.

Los mecanismos utilizados por estos grupos para obtener control del territorio fueron principalmente el desplazamiento forzado, el terror y el control sobre la población; un control económico ejercido sobre todos los sectores y un control social adoptado mediante las restricciones a la movilidad, la violencia contra las mujeres, el terror y el establecimiento de normas que la gente se veía forzada a acatar, entre otros (PNUD, 2010, pp. 20-21).

Estos grupos estaban vinculados y financiados por ganaderos y terratenientes, principalmente aquellos que dedicaban sus grandes fincas a la ganadería extensiva. Estas tensiones de carácter económico impuestas por las AUC se vieron reflejadas en “una nueva forma de extraer tributos, de regular la economía, de administrar justicia, de brindar protección, de organizar la prestación de los servicios básicos y de ejercer el monopolio de la coerción” (Duncan, 2006, citado por PNUD, 2010, p. 19).

Estas dinámicas agudizaron aún más el conflicto puesto que para lograr sus objetivos ejercían prácticas violentas como las masacres, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados, el

desplazamiento forzado, el hostigamiento y las amenazas, las cuales llenaron de terror a la población civil. Estas prácticas repercutieron en masacres como las de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, El Chengue y Macayepo (Porrás, 2014).

Esta grave situación de orden público obligó a que se hiciera necesario reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la región, en un contexto de violencia y barbarie en el que los miembros de estas instituciones quedaron expuestos –al igual que la sociedad civil– a unas acciones irregulares en su contra. las Farc, mediante el uso de explosivos no convencionales que acabaron con la vida y la integridad física de varios uniformados; y por el lado de las AUC, un contexto de masacres y acciones de gran impacto, que implicaron reacciones contundentes por parte de las Fuerzas Militares.

Estas acciones generaron en un primer momento una reacción negativa por parte de la población, que sentía que con los controles que ejercía la Fuerza Pública se limitaban sus libertades individuales; sin embargo, los procesos de consolidación que se dieron en los últimos años y el desarrollo de procesos de acción integral, han restaurado esta relación entre Fuerzas Militares y población civil.

Otro episodio clave que potenció y afianzó el conflicto desde una perspectiva económica fue el surgimiento del narcotráfico, el cual estaba articulado con los grupos armados ilegales. La alianza entre las AUC y los narcotraficantes permitió por un lado, la financiación de los recursos para sus organizaciones armadas y por el otro, creó una estructura ilegal para posibilitar el tránsito de la droga hacia el golfo de Morrosquillo (PNUD, 2010). Esta alianza conllevó a una dominación territorial *de facto* que en síntesis, se vio reflejada en acciones violentas como masacres y prácticas de amedrentamiento hacia la población civil con el fin de despojarla de sus fincas, incentivando el desplazamiento forzado de los campesinos.

Luego de más de 20 años de guerra marcada por el narcotráfico y la presencia de actores armados –de toda índole–, se da un giro trascendental en las dinámicas de confrontación en el territorio. Dicho giro se representa con la desmovilización de las AUC, la aparición de nuevos grupos armados –posdesmovilización– y el advenimiento de grandes empresarios interesados en la cooptación del territorio para el aprovechamiento exclusivo en términos meramente económicos y, en consecuencia, también políticos, modificando la estructura local de poder para sus intereses particulares. Estos nuevos actores

cumplieron la función de mantener los ciclos de conflicto marcado por nuevas dinámicas de violencia multidimensional.

Según De los Ríos y otros (2012), la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María que hizo presencia en la región, contó con la entrega de 594 combatientes, pero al decir del equipo, esta entrega no significó el fin de esta forma de violencia, solo representó el fin de las AUC. “En el año 2007 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en el marco de sus funciones de seguimiento y verificación del proceso de desmovilización, presentó un informe en el que se denunció el rearme o reestructuración de grupos armados ilegales” (De los Ríos y otros, 2012, p. 11).

Seguando a De los Ríos y otros (2012), estos nuevos grupos asumieron los nombres de “Los Paisas”, “Los Rastrojos”, “Los Urabebños” y “Águilas Negras”. Estos, ya sin la dirección central de las AUC, se consolidaron como organizaciones autónomas, más dedicadas a la economía del narcotráfico, pero manteniendo en sus prácticas las viejas estrategias de terror sobre la población civil como las “limpiezas sociales” y el confinamiento y restricción de la movilidad.

e) El Frente 37 de las Farc y el uso de explosivos no convencionales

Durante los años ochenta los grupos armados ya se habían consolidado en el territorio, “conformando el Bloque Caribe y los frentes 35 y 37 de las Farc, este bloque estuvo históricamente liderado por Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’” (Porrás, 2014). Sin embargo, con la llegada de la política de seguridad democrática, se generaron acciones conjuntas que permitieron la neutralización del Frente 37 de las Farc y el debilitamiento de esta estructura en la región de los Montes de María. Tras la muerte de alias “Martín Caballero” (abatido por las Fuerzas Militares en el año 2007) máximo dirigente de este frente y la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, la región fue repotenciada con varias inversiones de gran importancia, incentivando el capital y las dinámicas agroindustriales.

En cuanto al uso de los dispositivos no convencionales, según los relatos contados por los miembros pertenecientes a la Armada Nacional que fueron víctimas del conflicto armado en la región, se puede evidenciar que este tipo de dispositivos llamados AEI (artefactos

explosivos improvisados), eran fabricados de manera artesanal e irregular, lo que implicaba que no había un control real sobre el daño que estos podían realizar; así, estos artefactos afectaron por igual a la población civil y a los miembros de la Fuerza Pública.

Dentro de los tipos de AEI, se encuentran: los cilindros bomba, los balones bomba y los sombreros chinos, entre otros. Entre los AEI fabricados de manera artesanal, se encuentran varios tipos como: las latas de atún, recipientes y cualquier otro artefacto que pueda ser detonado. Por lo general, este tipo de dispositivos estaban enterrados y muy pocas veces quedaban a la vista de los uniformados, dado que la mayoría eran fabricados como minas antipersonal. Dichos artefactos contenían heces humanas, de animal, jeringas, tuercas, grapas de cerca, balines, pedazos de varilla, puntillas, metralla, alambre y púas o cualquier elemento que pudiera causar infección de manera inmediata, lo cual fue un factor de degradación y violación flagrante de la normatividad internacional por parte de esta organización delincuencia.

En diversos estudios (CNMH, 2016; Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009), se pone de manifiesto el alto grado de afectación que estas prácticas irregulares generaron sobre los uniformados, consecuencias que en este libro se explorarán desde la perspectiva humana de los afectados y de las víctimas directas.

Contexto geográfico, social e histórico de la región del Pacífico Centro

La región del Pacífico ha sido escenario de diversos procesos sociales y políticos a lo largo de la historia republicana del país, los cuales han configurado unos contextos de violencia, desigualdad y ausencia del Estado, que han favorecido la aparición de grupos armados ilegales y la propagación de distintas economías también ilegales. Todo esto a la par con una diversidad y riqueza cultural tal que complican la solución a los fenómenos de seguridad que deben enfrentar las instituciones nacionales encargadas de esta.

Así mismo, es un territorio estratégico por la afluencia de cuencas hídricas que comunican al centro y al sur del país con el océano Pacífico; situación que también propició la llegada de actores ajenos a la legalidad y la propagación de economías ilegítimas como

el narcotráfico y la minería ilegal, fenómenos que exigieron una respuesta integral por parte de la Fuerza Pública, en particular de la Infantería de Marina de la Armada Nacional.

En lo que respecta a los fines del presente documento se pondrá en evidencia la situación social, económica y cultural en que se han visto envueltos departamentos como Nariño y Valle del Cauca en el Pacífico colombiano, especialmente los municipios de Tumaco y Buenaventura, como sea que estos concentran un gran número de acciones irregulares en el marco del conflicto armado colombiano (CINEP, 2010) y que allí se han presentado distintas acciones violentas por parte de las Farc, las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente las denominadas bandas criminales (Bacrim), que han puesto en riesgo la integridad física de los miembros de las Fuerzas Militares.

Buenaventura es el municipio con mayor extensión territorial del departamento del Valle del Cauca, con aproximadamente 6.297 km², cifra que equivale al 29,7 % del área total del departamento; adicional a esto, cuenta con 9 parques naturales y 15 distritos biogeográficos, siendo una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo (POT, 2001, p. 2).

De igual manera, el municipio presenta unos indicadores demográficos muy complejos: su población, mayoritariamente afrodescendiente y que corresponde a un 82,5 % (según el censo del 2005), se asienta en un territorio que históricamente había sido habitado por pobladores indígenas, de los que actualmente persisten 22 comunidades, residentes principalmente en 9 cabildos que reciben transferencias, aunque se señalan 12 cabildos más que no reciben ningún tipo de estas (Ortiz, 2013, p. 8).

La región ha sido objeto de distintos procesos de colonización, impulsados principalmente por el desarrollo del sector portuario y el crecimiento del sector azucarero en las inmediaciones del municipio, ocasionando transformaciones morfológicas y demográficas; tal y como lo evidencia la transformación sociocultural que se produjo desde el siglo XVII con la llegada de las comunidades negras al territorio, y el paulatino desplazamiento de los pueblos indígenas originarios (pueblos que se desplazaron hacia la región del Patía en el actual departamento del Cauca).

Pese a la fuerte presencia de comunidades negras, los recursos y fuentes de generación de riqueza han estado en manos de población

mestiza, lo cual ha generado históricamente unos altos niveles de inequidad y unas tensiones étnicas significativas. Al respecto, vale la pena señalar cómo las estadísticas oficiales de la ANSPE (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema) señalan que los niveles de pobreza extrema en la región se concentran en las zonas afrodescendientes, y que son estas comunidades las que mayores niveles de vulnerabilidad reportan (ANSPE, 2015).

Las dinámicas económicas que se han dado en la región han exigido la proliferación de estructuras agrarias vinculadas al latifundio y a la alta concentración de la tierra, especialmente por la proliferación de cultivos de caña de azúcar y de bosques madereros que se desarrollaron en la región desde finales del siglo XVIII y que profundizaron un conflicto en torno a la tenencia de la tierra y a la autonomía de las comunidades allí asentadas.

Esta situación se va a complicar con la instauración del puerto de Buenaventura en las primeras décadas del siglo XIX, y con la construcción del ferrocarril que comunicaría a la ciudad de Cali y al centro del país con este importante puerto. Los usos tradicionales del suelo, los cultivos originarios y las relaciones sociales con el territorio se van a reconfigurar a la luz de este proceso irregular de modernización e industrialización de la región. Y es que, a pesar de la llegada de grandes capitales económicos, del desarrollo económico del puerto y de la aparición de grandes riquezas, los niveles de inequidad van a seguir siendo los mismos, produciendo grandes cinturones de miseria alrededor de la riqueza del puerto.

Por ello emergerán actividades económicas ilegales y no industrializadas en las que se aprovecharon los afluentes fluviales y la salida al mar, para generar dinámicas de contrabando, dado el poco control estatal que se tuvo en sus primeros años y que permitió la proliferación de estas organizaciones delictivas vinculadas directamente con los ríos y con el océano Pacífico.

Dentro de los principales afluentes hídricos se señalan el río San Juan, la cuenca hidrográfica de la bahía de Buenaventura, Bahía Málaga, los ríos Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya, por mencionar solo algunos. Fuera de tener una cercanía próxima al océano Pacífico y contar con sus diferentes cuencas hídricas, su ubicación resulta privilegiada al tener a Panamá y las costas del Ecuador a distancias relativamente cortas. Hay que mencionar además la proximidad (no de igual distancia a Panamá

y a Ecuador) a los puertos de Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile), que evidentemente resulta por ser la vía más asequible para arribar a ellos, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2005, p. 32).

Buenaventura se ha constituido nacionalmente como el más importante puerto marítimo del océano Pacífico, codiciado y apetecido por diferentes actores legales e ilegales, que durante las últimas décadas han incursionado en dicho territorio generando acciones violentas e irregulares en contra de la población civil y de las Fuerzas Militares, con afectaciones específicas contra los miembros de la Armada Nacional.

Por otra parte, Tumaco, ubicado en el suroccidente de Colombia y en el occidente del departamento de Nariño, tiene una extensión aproximada de 3.601 km² (con una población total de 163.102 habitantes), medida que en comparación con la de Buenaventura resulta ser aproximadamente la mitad de su área total, dicha medida representa solo el 12,3 % de todo el departamento de Nariño; entre sus pobladores se encuentran afrodescendientes e indígenas del pueblo awa.

Hay que mencionar además, que Tumaco cuenta con diferentes accidentes costeros como el cabo Manglares, la ensenada de Tumaco, las islas del Gallo, La Barra, El Morro, Tumaco y San Juan de la Costa, juntas rodeadas y agrupadas en medio de los ríos Alcabí, Curay, Chagüí, Güiza, Mataje, Mejicano, Mira, Nulpe, Patía, Pulgandé, Rosario, San Juan y Tablones (POT, 2008-2019, p. 13).

Estos accidentes geográficos potencian la actividad de tráfico e intercambio de mercancías ilegales y que ha hecho de este territorio un botín en disputa por parte de los actores armados, y un punto clave en la configuración de la región por parte del Estado: “Esta biodiversidad convierte a Tumaco en un lugar estratégico, pues permite a través de su selva y sus bosques de manglar, camuflar los lugares y los medios en que se realizan toda clase de ilicitudes, entre ellas fundamentalmente el ciclo del procesamiento de la droga, que se exporta con las facilidades que presenta la comunicación fluvial, con cinco ríos que desembocan en el océano Pacífico, lugar en el que además se encuentra el principal puerto petrolero del Pacífico y el segundo del país” (Prieto, 2015, p. 13).

La ubicación de Tumaco está conformada por fronteras de gran importancia estratégica para el transporte y flujo de mercancías, limitando al norte con los municipios de Francisco Pizarro, Roberto Payán y Mosquera, al sur con la República de Ecuador, al occidente

con el océano Pacífico y al oriente con el municipio de Barbacoas (POT, 2008-2019, p. 13).

Tumaco fue escenario de una tradición pesquera de donde se extraían los principales recursos de la región, pero donde también se configuraron unas formas culturales y gastronómicas fuertemente ancladas en la población. Este tipo de actividad económica generó una diferencia fundamental con el caso de Buenaventura. En el municipio nariñense había menos concentración de los medios de producción y por ende menores niveles de pobreza e inequidad. Así, investigaciones históricas plantean que el municipio tuvo unos niveles de violencia y conflictividad social relativamente bajos en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.

La tradición pesquera, el demandante mercado del sur del país y del norte ecuatoriano, anclado a la posibilidad de pescar con medios rudimentarios y de fácil acceso, van a permitir que la región tenga unas condiciones relativamente homogéneas de estabilidad económica. Sin embargo, la llegada de los actores armados implicaría una transformación de la vocación económica del territorio, y el inicio de unas formas de extorsión y apropiación ilegal de los derechos de pesca que devendrían en cruentos escenarios de confrontación.

La llegada de los grupos armados al margen de la ley, los intentos estatales de formalización productiva, y las respuestas sociales al impacto del narcotráfico fueron los factores clave que devinieron en expresiones violentas: “La Ley 70 de 1993 requería para su aplicación de una serie de condiciones que no fue posible poner en práctica, porque paralelamente a su expedición nuevos factores irrumpieron. En primer lugar, la expansión del narcotráfico y la de los actores armados irregulares, tales como las guerrillas de las Farc y el ELN y las autodefensas, esencialmente el Bloque Libertadores del Sur (BLS), adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB). Así mismo, después de la desmovilización de las autodefensas, además de la presencia de la guerrilla que subsistió, se evidenció la aparición de agrupaciones como la Organización Nueva Generación (ONG) y de Los Rastrojos. Estos efectos asociados a la violencia afectaron el proceso de constitución de los consejos comunitarios, retardaron los procesos de titulación, alteraron las formas de producción tradicionales e impactaron en una serie de aspectos de orden cultural y social” (Escobedo y Garzón, 2009, p. 41).

Aquí emerge un primer elemento diferencial entre los municipios analizados; para Buenaventura y en términos generales para

el Valle del Cauca, las dinámicas del conflicto armado tuvieron sus primeras apariciones por cuenta de “las Farc quienes arribaron a la zona rural de Buenaventura, luego de haber incursionado en otros municipios del Valle del Cauca como Tuluá, Buga, Palmira, Florida y Pradera que limitan con asentamientos originales e históricos de esta agrupación, como Marquetalia en el Tolima y Río Chiquito en el Cauca” (CNMH, 2015, p. 156).

Las modalidades empleadas por las Farc durante los años setenta (años en que arribaron al Valle del Cauca) se caracterizaban “por tener niveles muy bajos de operatividad armada y victimización, pero respondían fielmente al objetivo de expansión territorial que se había consignado en la Quinta Conferencia de las Farc en 1974” (CNMH, 2015, p. 157). Para este grupo armado, la región se configuraba como un corredor estratégico de movilidad que le permitía conectar sus estructuras armadas del norte del país con el Bloque Sur, en un contexto en el que se propagaron rápidamente los cultivos ilícitos y las rutas de salidas de narcóticos.

En estos primeros años del conflicto, el grupo armado quiso capitalizar las disputas sociales que existían en la región por cuenta de la concentración de recursos, desarrollando un discurso de lucha de clases como estrategia política enfocada a conseguir el apoyo y el respaldo por parte de los bonaverenses, discurso que no tuvo tanto eco a causa de los fundamentos ideológicos tan arraigados a la lucha étnica que profesaban las comunidades afrodescendientes del Pacífico (Carrillo, 2006, p. 157).

Tanto las modalidades delincuenciales como el discurso político de las Farc, fueron acompañados por prácticas que pretendían la configuración y consolidación de un territorio coaccionado y determinado por sus principios doctrinales; lo cual devino en reacciones sociales a la presencia de este actor, al que acusaban de haber generado acciones violentas contra la población civil que se resistía a la pretensión de control social que se quería ejercer. Por ejemplo, están ampliamente documentadas las incursiones en las que este grupo sabotaba y estropeaba los motores de las embarcaciones de aquellos que no comulgaban con sus ideas, acciones que distanciaron progresivamente a la población civil del grupo (Echandía, 2009).

Arturo Alape (1994), uno de los principales investigadores sociales sobre el accionar de esta organización ilegal, afirma que

hacia el final de la década de los setenta las Farc habían perdido los territorios en los que simbólicamente se habían conformado, y que esto había producido una reacción violenta de la organización contra las comunidades. Así mismo, la aparición de estructuras armadas ilegales asociadas al narcotráfico (paulatinamente al Cartel del Valle) les disputarían los territorios en los que ejercían presencia. Del mismo modo, este investigador advierte sobre el reconocimiento social que se tuvo de la presencia de las Fuerzas Militares en la región, en ese momento histórico, protegiendo a la población civil de la arremetida de esta organización violenta.

La presencia del Estado por medio de la Fuerza Pública (con un componente significativo de la Armada Nacional), las disputas de grupos ilegales cercanos al narcotráfico, y las tensiones con la población civil, llevarían a que las Farc cambiaran su relación con este territorio, buscando posicionarse en los corredores de movilidad que les conducirían a los departamentos de Cauca y Huila (hacia el sur del país) y hacia Chocó y el nordeste antioqueño, en búsqueda del vórtice del Magdalena Medio.

Cuando en la década de los años ochenta se plantea el proyecto de expansión y colonización territorial que se propusieron las Farc en su Quinta Conferencia celebrada en el Meta, se produjo la atomización del grupo armado como parte de una estrategia territorial que buscaba transformar la morfología de la organización, a través de la creación de nuevos frentes y del posicionamiento estratégico en corredores de movilidad que permitieran garantizar su presencia en zonas claves de la economía del país.

Como objetivo adjunto a esta conferencia se propuso la creación del Frente 5 que operaría en Antioquia y el Frente 6 que actuaría en el Cauca y el Valle del Cauca; este último, con la misión de controlar las rutas del Pacífico y de generar presencia significativa en las zonas aledañas a los puertos. Los relatos de la población señalan la violencia y la barbarie de este frente, y también le acusan de haber generado vínculos ilegales con el narcotráfico (Alape, 1994, p. 76).

Por otra parte, Nariño y Cauca tuvieron sus primeros indicios de presencia de las Farc a mediados de los ochenta por la región del Alto y Medio Patía, “corredor que posteriormente adquiere bastante importancia pues allí se incrementan significativamente los cultivos de coca en la medida en que articula al Caquetá y al Putumayo con la costa Pacífica, así como con la presencia de agrupaciones de

autodefensas. Del mismo modo, es importante señalar la carretera de Pasto a Tumaco, pues por ella se desplazaron los actores armados irregulares que tuvieron incidencia en Ricaurte, el occidente de Barbacoas y Tumaco” (Escobedo y Garzón, 2009, p. 43). La revisión histórica de las Farc en la región lleva a señalar que sus movimientos se orientaron a las dinámicas del narcotráfico, y que en la protección y defensa de estos cultivos generaron acciones irregulares y violentas en contra de los miembros de las Fuerzas Militares; varios de los testimonios de los miembros de la Armada Nacional van a señalar que, en la medida en que se ejercía mayor control y erradicación de cultivos, se iban a incrementar la violencia y las acciones irregulares contra sus miembros.

Aunque su presencia no fue tan notoria, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también destinó algunos de sus frentes en la costa Pacífica especialmente en los departamentos de Nariño y Cauca. “En lo que respecta a la costa nariñense, se destaca el Frente Comuneros del Sur, que tiene presencia en el Pacífico, a partir de dos columnas que se expandieron alrededor de la economía del oro, con lo que se situó en una de las entradas al Pacífico, utilizando los ríos Telembí y Patía; por otro lado la columna Guerreros del Sindagua, con presencia en el municipio de Iscuandé y que esporádicamente ha hecho desplazamientos hacia el municipio de El Charco; su presencia en Iscuandé se explica también por la existencia de explotaciones de oro” (Escobedo y Garzón, 2009, p. 45).

Tanto las Farc como el ELN durante su primera etapa de emergencia, se enfocaron en el fortalecimiento y colonización de territorios que consideraban fundamentales para garantizar el control de recursos naturales e ilegales. Dicha economía funcionó de manera simultánea con una serie de ataques y enfrentamientos de gran envergadura tal como lo mencionan Escobedo y Garzón (2009) afirmando que: “Por los años noventa al tiempo que se expidió la Ley 70, se produjeron varios cambios. En primer lugar, los comandantes de la primera fase, que tenían un importante perfil político, fueron reemplazados en la primera mitad de los años noventa y llegaron otros más violentos y guerreros, que se distanciaron de la población (...). A finales de los años noventa, las Farc adquirieron más fuerza a nivel bélico, cuando los ataques se incrementaron y se ejecutaron golpes que debilitaron a la Policía, que buscaban abrir un corredor desde el interior del país hacia el Pacífico” (p. 44).

En el Valle del Cauca la situación se complicó y agravó con el fortalecimiento de las estructuras armadas vinculadas al narcotráfico,

y con las distintas formas de interacción que estas organizaciones desarrollaron con las Farc, algunas veces enfrentadas de forma violenta por el control del territorio o de una ruta y otras en abierta connivencia y asociación. Como sea, este grupo se vio beneficiado del incremento de la presencia de cultivos de coca en la región, ya fuera por el cobro de impuestos o gramaje por el comercio de coca o por el desarrollo de actividades relacionadas con el tráfico de drogas (Delgado, 2012).

Además del cobro a narcotraficantes, se realizaban extorsiones a grandes empresarios, control territorial de zonas urbanas y rurales de Buenaventura, bloqueos en la vía que comunica a este municipio con el interior del país, explotación ilegal de los oleoductos y secuestros individuales y masivos. Estos hechos evidenciaban la consecución real de los objetivos que se propusieron para la década del noventa en términos de expansión y fortalecimiento económico (CNMH, 2015, p. 162). Este factor es muy ilustrativo de la importancia que le dio este actor a este territorio, y explica por qué reaccionó tan violentamente ante la presencia de la Fuerza Pública en la región, ensañándose de forma particular contra las Brigadas Fluviales de Infantería que se ocuparon de contrarrestar las pretensiones de control de las cuencas fluviales que atraviesan la región.

Estas acciones se vieron potenciadas con la creación del Frente 30 de las Farc –perteneciente al Bloque Occidental– en la segunda mitad de la década de los años noventa, profundizando las condiciones de violencia en la región, y haciendo más necesario el accionar de las Fuerzas Militares, especialmente de la Armada Nacional, por medio de su componente de la Infantería de Marina porque este frente tenía la tarea de bloquear las conexiones entre el puerto y la zona continental de esta región. El accionar de este frente se ensañó contra la población civil, incrementando la dinámica de reclutamiento de jóvenes, potenciando los vínculos con la delincuencia común que actuaba en los cascos urbanos y exacerbando las economías ilegales: narcotráfico, contrabando y minería ilegal (Blair, 2006).

Este frente de las Farc es de importancia para los fines de este contexto, porque fue el responsable de una buena cantidad de acciones violentas en las que resultaron afectados, heridos y asesinados miembros de la Infantería de Marina que opera en la región, especialmente cuando las acciones de la institución se orientaban al control del tráfico de estupefacientes. Esto es una clara evidencia del vínculo

que estableció la organización ilegal con el narcotráfico y de los móviles materiales que explican su fuerte presencia en esta zona del país, aunque también es un elemento contextual que explica por qué a una institución como la Armada Nacional le fue necesario robustecer su presencia en la región, por ejemplo a través de la creación de la Brigada Fluvial de Infantería N° 2:

La Segunda Brigada Fluvial de Infantería de Marina con puesto de mando en la ciudad de Buenaventura (Valle), planea, desarrolla y ejecuta operaciones anfibia, fluviales y terrestres dentro del marco estratégico y táctico, con el propósito de doblegar la voluntad de lucha y la capacidad terrorista de los agentes generadores de violencia que delinquen en la jurisdicción asignada. La responsabilidad fluvial y terrestre de la Armada Nacional en 26.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción en el Pacífico se contabiliza desde el punto de la más alta marea, veinte kilómetros en profundidad desde límites con Panamá hasta límites con la República del Ecuador. Los municipios que conforman la jurisdicción de norte a sur son: Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Pizarro y Docordó en el Chocó; Buenaventura en el Valle del Cauca; Timbiquí y Guapi en el Cauca; y La Tola, Iscuandé, Mosquera, Satinga, Salahonda, El Charco y Tumaco en Nariño entre otros, y cuentan con la presencia permanente de la Infantería de Marina. (Armada Nacional de Colombia, 2015)³.

El Frente 30 desarrolló su accionar en el Valle del Cauca, ocupando en primera medida “los corredores limítrofes con el océano Pacífico desde Jamundí hasta el puerto de Buenaventura. De allí, surgen las milicias urbanas del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas que tenían como misión adelantar labores políticas para atraer

3 La Brigada Fluvial de Infantería N° 2 está compuesta por: el Batallón de Asalto Fluvial de IM N° 1 (Buenaventura, Valle); el Batallón de Asalto Fluvial de IM N° 3 (Bahía Solano, Chocó); el Batallón de Asalto Fluvial de IM N° 4 (Bahía Málaga, Valle); el Batallón Fluvial de IM N° 10 (Guapi, Cauca); el Batallón Fluvial de IM N° 70 (Tumaco, Nariño); el Batallón Fluvial de IM N° 80 (Buenaventura, Valle); y el Batallón de Comando y Apoyo de IM N° 3 (Buenaventura, Valle). Como se puede apreciar, garantiza una presencia efectiva de la Armada Nacional en todos los territorios clave de la región Pacífico de Colombia (Armada Nacional de Colombia, 2015).

adeptos y consolidar su base social. Con esta estrategia, pretendían lograr el control urbano especialmente en los esteros de los ríos para poder conectarse fácilmente con el mar y la carretera” (FIP, s. f., p. 36).

El fuerte control ejercido por las Fuerzas Militares, y la presencia en los principales ríos de la región de la Infantería de Marina, obligó a que las Farc buscaran fortalecer su presencia en la zona, creando en 1995 el Frente 60; desarrollando sus primeras apariciones en territorios aledaños a los departamentos del Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Huila, hasta lograr su plena intromisión en el departamento del Cauca a través de los municipios de El Tambo, Patía, Argelia y Balboa. A su vez, intentaron fortalecer a la Columna Móvil Jacobo Arenas, como también lo hizo el Frente 29, utilizando los ríos Patía y Telembí como medio estratégico para su afianzamiento en los municipios de Barbacoas y Tumaco. Lo interesante de este fenómeno es la evidencia de que para el final de la década de los años noventa, las Farc estaban buscando un repliegue de la zona de Buenaventura por la efectiva acción de las Fuerzas Militares (Escobedo y Garzón, 2009, pp. 44-45).

Tumaco y Barbacoas especialmente, fueron municipios que sintieron de manera drástica las duras repercusiones que acarrea la creciente expansión de los cultivos de coca que para finales de la década de los años noventa se presentaba en la zona, por cuenta del accionar del Frente 29, que tenía presencia en Tumaco, Barbacoas e Iscuandé.

Para finales de la década de los noventa, las Farc estaban totalmente influenciadas por el negocio del tráfico de drogas, lo que les llevó a impedir el desarrollo de otros tipos de actividades legales que disputaran la tenencia y el uso de la tierra. En ese contexto arreciaron las extorsiones y los secuestros de hacendados y empresarios en la región, lo que devino en la llegada de estructuras asociadas a las autodefensas ilegales.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) conformadas en el año 1997, se asentaron desde el año 1998 en el departamento del Valle del Cauca, con la pretensión de apoderarse del negocio de la droga y de frenar la propuesta expansiva de las Farc; su presencia se inició “con 50 integrantes, a los municipios de Tuluá, Bugalagrande y Buga, provenientes del Urabá y bajo la comandancia de Rafael Antonio Londoño Jaramillo alias ‘Rafa Putumayo’. Poco tiempo después Elkin

Casarrubia, alias ‘El Cura’, reforzó al primer grupo con 25 integrantes más, también provenientes del Urabá” (CNMH, 2015, p. 165).

El objetivo central de las AUC fue la consolidación del Bloque Pacífico que buscaba tomar el control total del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, consiguiendo así el total dominio de todas las rutas del narcotráfico en Colombia. Para esta misión se encomendó a Éver Veloza, alias “HH”, quien asumiría la comandancia del Bloque Calima, organización que creció de forma exorbitante ejerciendo gran poder y control sobre los territorios fijados desde un inicio.

Este Bloque Calima fue el responsable de un gran número de acciones violentas contra la población civil, ya que intentaron cortar cualquier vínculo entre las Farc y el ELN con la sociedad. Las incursiones violentas exigieron una respuesta contundente por parte de las Fuerzas Militares, que contrarrestaron varias acciones violentas desarrolladas por esta organización, en las que habían apelado “al reclutamiento de combatientes, la creación de una red de aliados económicos (empresarios, comerciantes, narcotraficantes) y armados (integrantes de bandas criminales, excombatientes de las Farc y antiguos miembros de la Fuerza Pública que de forma ilegal e individual se vincularon a estas) y a la exploración de nuevos territorios, siempre justificando sus acciones de victimización a partir del discurso antisubversivo, lo que afectó negativamente a la población” (CNMH, 2015, p. 165).

El Bloque Calima empleó modalidades de tortura bastante crueles e inhumanas de las cuales hay registro detallado, como lo ocurrido el 21 de mayo de 2000, en la vereda Campo Hermoso, del municipio de Buenaventura, donde asesinaron a cuatro personas y secuestraron a seis más, las víctimas se encontraron al día siguiente con señales de tortura, y según narran los pobladores, el hecho pudo haber sido más grave de no ser por la reacción temprana de la Infantería de Marina que operaba en la zona.

Para ilustrar mejor la dinámica violenta de esta organización, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2005) registra que: “Durante los recorridos de la muerte se dejaron mensajes amenazantes a través de grafitis anunciando la llegada y establecimiento de las AUC en la región. Frente al miedo y a las amenazas perpetradas por las AUC, las comunidades del área rural se desplazaron masivamente llevando consigo la memoria del horror vivido y presenciado, sumado al estigma de ser considerados ‘guerrilleros’ o ‘colaboradores de la

guerrilla” (p. 275). A esto se debe sumar el uso de panfletos, grafitis y llamadas telefónicas intimidantes.

Al sur de la región, en el contexto regional de Tumaco desarrolló su accionar el Bloque Libertadores del Sur, estructura armada que también entró a disputar el control de los cultivos y ganancias del narcotráfico, para lo cual “se tomaron las carreteras y autopistas fluviales, obligando a las organizaciones de narcotraficantes a pagarles directamente a ellos el gramaje o impuesto que venía cobrando la guerrilla por todo el proceso, desde el cultivo hasta la comercialización de la coca” (Ortiz, 2013, p. 20). El intento de apoderarse de los principales ríos de la región, llevó a que la Infantería de Marina tuviese que contrarrestar los propósitos criminales que este bloque tenía sobre la malla fluvial, desarrollando operaciones permanentes para impedir la salida de narcóticos y la entrada de insumos para su producción. Este conflicto se verá reflejado en los testimonios de los miembros de la Armada Nacional en los que se inspira esta publicación, ya que el control de los ríos generó un escenario de hostilidades y violencia que pondría en riesgo la integridad física de la población civil y la de los Infantes de Marina y demás miembros de la Armada Nacional.

El incremento del negocio de la coca en Nariño y Cauca y el auge de la violencia que esto trajo consigo, debe ser estudiado también en función de unas variables exógenas, derivadas de la situación del conflicto armado en otras regiones estratégicas del país. Con la consolidación de la política de seguridad democrática y el desarrollo del Plan Patriota en el año 2003, el Estado colombiano, a través de las Fuerzas Militares, desarrollaría unas acciones integrales contra los grupos armados ilegales y contra el narcotráfico en el Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, tipificados como los departamentos más afectados por el conflicto en la década de los noventa.

Esto tendría dos consecuencias: de un lado el debilitamiento de las estructuras ilegales que delinquían en esa región, y de otro lado, el traslado, en un efecto globo, de esas dinámicas criminales a otras regiones. En este marco se presentaron desplazamientos de los cultivos, cristalizaderos y laboratorios hacia el Pacífico, particularmente a Nariño y Cauca (Escobedo y Garzón, 2009, p. 42).

Es importante señalar que en los estudios sobre el conflicto armado colombiano, siempre se planteó que la situación de este, se transformaría radicalmente con la entrada en vigencia de la política de seguridad democrática, con la entrada en vigencia del Plan

Colombia y con las nuevas formas operativas que desarrollarían las Fuerzas Militares. Estos factores serían determinantes para articular operaciones militares contundentes y efectivas en contra de las AUC, lo que eventualmente las llevó a su desmovilización en el año 2005 y a romper los intentos expansivos de las Farc.

Así, aunque se siguen produciendo acciones violentas en el contexto del conflicto, se reducirán progresivamente las acciones violentas de gran envergadura que se dieron en la década del noventa, dando lugar a nuevas formas de microcriminalidad vinculadas al narcotráfico, y a una mimetización de los actores armados con estas nuevas estructuras criminales e ilegales.

Por ello, la desmovilización de las AUC y del Bloque Calima y de los Libertadores del Sur, dio paso a la aparición de unas organizaciones violentas, íntimamente vinculadas con el narcotráfico, con un fuerte arraigo territorial y sin discursos contrainsurgentes, lo que les permitiría establecer alianzas con las Farc y el ELN. Muchos de estos grupos se tipificaron como “posdesmovilización” en la medida en que miembros del Bloque Pacífico no hicieron parte del proceso de desmovilización, y serían los actores que estructurarían organizaciones criminales como La Empresa y Los Urabeños (FIP, s. f.).

Estas nuevas organizaciones van a concentrar la violencia en zonas específicas del territorio (ver mapa), y a desarrollar su accionar armado contra la población civil, recurriendo a estrategias de terror encaminadas a ejercer control sobre esta y a impedir cualquier forma de acción colectiva que busque desvirtuar su accionar en la zona, o cualquier intento de denuncia ante las autoridades policiales y militares; hecho último que se convierte en uno de los grandes desafíos de la Armada Nacional en esa región del país.

En ese sentido deben comprenderse los espacios de tortura y muerte que han sido denominados coloquialmente como “casas de pique”, y que encarnan la degradación del conflicto por cuenta del narcotráfico, y evidencian los nuevos retos de seguridad que tiene el Estado en estos municipios. Carrillo (2014) afirma que “en varios de los barrios, los residentes denuncian que existen ‘casas de pique’, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida” (p. 7).

Con estas prácticas, según Blair (2006), “la destrucción total y la teatralización del exceso se constituyen en el propósito de la

Figura 1. Accionar de las AUC en la región Pacífico Centro

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (s. f.).

masacre, donde la libertad para realizar actos atroces se posibilita en la configuración de un dispositivo espacio-temporal que tiene como fin encapsular el horror y prolongar la agonía de las víctimas y de los testigos” (p. 278).

Ejemplo de ello se vislumbra en los escenarios de barbarie, donde las víctimas eran atadas de pies y manos a una tabla que hace las veces de camilla donde se practicaban las torturas, utilizando machetes, cuchillos o hachas para desmembrar los cuerpos y depositarlos por partes en bolsas plásticas, con el objeto de arrojarlos después al mar, a los esteros o a los cementerios clandestinos (CNMH, 2015). Así, el cuerpo empieza a considerarse como un medio más de generar y perpetuar la violencia acaecida durante estos años.

Estas prácticas, que se volvieron reiterativas a lo largo y ancho del municipio de Buenaventura y de la región, y tanto la violencia armada como la violencia sexual, quebrantaron los hábitos y costumbres practicados cotidianamente entre familias; “ya no se sientan en la puerta de sus casas a hablar y a compartir, a jugar bingo, tampoco hablan con sus vecinos por temor a represalias” (Carrillo, 2014, p. 12). En resumen, se ha venido configurando una cultura del miedo y el temor infundido por los actores armados ilegales y difundido entre la población misma, lo cual denota un agravamiento de la situación de seguridad en la región.

En el caso de Tumaco la situación también se agravó luego de las desmovilizaciones de las AUC, con la aparición de organizaciones violentas como Los Rastrojos, que delinquen principalmente en el último tramo del río Mira, en Llorente y en el casco urbano del municipio. Para el Cauca, la Organización Nueva Generación será la encargada de llenar el vacío dejado por las autodefensas (Escobedo y Garzón, 2009, p. 56).

En cuanto a las Farc, durante el período de las negociaciones con las AUC y posteriormente a este proceso, se ha presentado una reestructuración de esta organización armada, que ha buscado alianzas con estas nuevas organizaciones armadas, beneficiándose mutuamente del negocio del narcotráfico, de esta manera “recrudesció su accionar en la zona rural de Buenaventura en contra de la población, reproduciendo la época de las masacres de principios de la década, desarrollando acciones como secuestrar, torturar, desaparecer y amenazar a sus víctimas” (CNMH, 2015, p. 279).

Al poner en disputa a la población se negociaba la pertenencia o no a este o al otro bando, por lo que “vivir en una zona de permanente conflicto y militarización, con altos índices de pobreza y miseria, va generando un escenario proclive al reclutamiento, el cual es capitalizado por los diferentes grupos a través de prácticas como suministrar dinero, celulares, motos o armas a niños y jóvenes a cambio de ‘favores’, mandatos, transporte o venta de drogas y manejo de información, entre otras acciones” (CNMH, 2005, p. 288).

Por otra parte, las Farc en Tumaco potencializaron su acción violenta a niveles bastante altos en relación con el bajo impacto que tuvieron en otros municipios de Nariño, particularmente entre los años 2009 y 2010. En este período, las Farc intentaron apoderarse de los territorios en los que anteriormente actuaban las AUC, generando articulaciones con grupos de delincuencia organizada, o entrando en conflicto con estos por el control del territorio. En cualquiera de los dos casos, propiciando unas exacerbaciones de la violencia en la región (Prieto, 2015, pp. 26-27).

Por ello, la situación actual que se vive en la región induce a tener una mirada paradójica de lo que está sucediendo. Por un lado, se han reducido los índices de homicidios, pasando de 416 a 176 entre los años 2006 y 2010, la Armada Nacional en representación de la Infantería de Marina ha jugado un papel fundamental en el despojo del miedo para el arribo y colonización de la esperanza y la seguridad.

Su presencia ha desplegado un conjunto de tropas a fin de recuperar y entregar el control territorial nuevamente a la Policía (FIP, s. f., p. 15).

Por otro lado, el conflicto se ha atomizado y disgregado, haciendo más complejo el actuar de la Fuerza Pública en Tumaco, y reduciendo el rol institucional que pueden desarrollar instituciones militares como la Armada Nacional. “La situación de orden público es complicada debido a la sectorización de la ciudad por parte de las bandas que ejercen control. Los integrantes de las milicias urbanas han cambiado su manera de delinquir y ahora lo hacen bajo la clandestinidad, vistiéndose de civil para pasar desapercibidos y evitar la presión de la Fuerza Pública” (FIP, s. f., p. 15).